

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Correspondencia.
- 4.- Iniciativa que presentan las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza Sonora y del Partido Verde Ecologista de México y de la Representación Parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, con proyecto de Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
- 5.- Iniciativa que presenta la diputada Natalia Rivera Grijalva, con proyecto de Ley que reforma el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
- 6.- Iniciativa que presentan las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyectos de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora; de Decreto por el que se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora; y de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Sonora.
- 7.- Propuesta de la Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de que el Pleno de este Poder Legislativo, habilite para sesionar, días distintos a los ordinariamente establecidos por la Ley.
- 8.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

01 de septiembre de 2021. Folio 001

Escrito del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el que remite a este Poder Legislativo, respuesta al exhorto para que, en ámbito de sus competencias, colaboren y coordinen una estrategia para apoyar en el ámbito laboral a las personas adultas mayores de Sonora. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO NÚMERO 460, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021.**

01 de septiembre de 2021. Folio 002

Escrito de la Presidenta Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mediante el cual informa a este Poder Legislativo, que en sesión extraordinaria número 86, de fecha 31 de agosto del presente año, fue calificada procedente y aprobada la licencia solicitada por el C. Martín Adán Ruelas Velderrain, para ausentarse de sus labores como Síndico Municipal por un término de 2 días, contado a partir del día 01 de septiembre de 2021. **RECIBO Y ENTERADOS.**

03 al 07 de septiembre de 2021. Folios 003,004, 007 y 009.

Escritos de los Presidentes Municipales y de los Secretarios de los Ayuntamientos de Bacanora, Arizpe, Nacozari de García y Baviácora, Sonora, con los que remiten a este Poder Legislativo, la propuesta de planos y tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2022, para lo cual solicitan la aprobación respectiva de este Congreso del Estado. **RECIBO Y SE RESERVA EN TANTO SE CONFORMEN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS.**

03 de septiembre de 2021. Folio 005

Escrito del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, mediante el cual solicita a este Poder Legislativo, informe sobre la solicitud de autorización de un crédito con cualquier institución bancaria, para solventar pasivos generados por administraciones pasadas, para pago de demandas laborales y mercantiles, que se encuentran con sentencias

condenatorias en contra de dicho ayuntamiento, presentada por el referido Ayuntamiento.
RECIBO Y SE CONTESTARÁ LO CONDUCENTE.

03 de septiembre de 2021. Folio 006

Escrito de la Auditora Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, informe de solventación en atención a la información presentada mediante oficio número ISAF/AAE/2920/2021, de fecha 09 de febrero de 2021. **RECIBO Y SE RESERVA EN TANTO SE CONFORMEN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS.**

06 de septiembre de 2021. Folio 008

Escrito del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el cual envía a este Poder Legislativo, informe sobre la recaudación de ingresos adicionales y/o excedentes correspondientes al periodo comprendido al mes de julio del ejercicio fiscal 2021, en los rubros establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que fue aprobada por esta Legislatura. **RECIBO Y SE RESERVA EN TANTO SE CONFORMEN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS.**

Hermosillo, Sonora, a 09 de septiembre de 2021.

HONORABLE CONGRESO:

Las y los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como de la Representación Parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, de esta Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de nuestro derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA**, misma que sustenta bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de febrero de 1917 se promulgo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual sigue vigente a la fecha y ha sido sujeta a varias reformas en aras de generar un marco jurídico que obedezca a las necesidades de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento en el que se expresan y reconocen los derechos más importantes de todas las personas, así como la estructura orgánica de las Instituciones fundamentales que conforman el estado mexicano. Es la norma jurídica suprema.

Para ese efecto, en el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la Ley Suprema, que a la letra dice:

*“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la **Ley Suprema** de toda la Unión...”*

Bajo ese mismo orden de ideas, la misma Constitución General establece la forma de gobierno que habrán de adoptar los Estados.

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu filósofo y jurista francés del siglo XVII y XVIII, en su obra “El espíritu de las leyes”, define la forma de gobierno republicano como:

“El gobierno republicano es aquel en que el pueblo en masa, o solamente una parte de él, tiene la soberanía”.

En el Estado Mexicano, el ejercicio del Poder Soberano se divide en tres poderes, los cuales se integran por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder ejecutivo, cada uno con características específicas en cuanto a su conformación y funcionamiento, tal y como lo indican los Artículos 49 y 116 de la Constitución General, que al efecto disponen:

*“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en **Legislativo, Ejecutivo y Judicial**.*

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 116. *El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.”

Con base a lo anteriormente señalado, es oportuno destacar que la presente iniciativa pretende modificar el andamiaje jurídico sobre el cual se erigen las Instituciones del Estado de Sonora materia de esta propuesta de reforma, con una visión democrática en la que impere el fortalecimiento de las mismas Instituciones, con la intención definitiva de lograr la convergencia entre los poderes del estado con una clara separación de los mismos y sobre todo, generar un equilibrio entre estos.

Dentro de este equilibrio, se encuentran también los órganos constitucionalmente autónomos, mismos que no cuentan con adscripción orgánica ni administrativa a ninguno de los Poderes del Estado. En ese sentido la Constitución establece un núcleo de competencia básico para el desempeño de sus atribuciones y, por tanto, son órganos autónomos que tienen una coordinación con los demás poderes tradicionales, sin subordinarse a ninguno de ellos.

Desde la década de 1990, la estructura del Estado Mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional. Con excepción de la Universidad (Nacional) Autónoma de México, cuya autonomía constitucional data de 1980, desde 1993 en que se otorga libertad de autogobierno al Banco de México, se produjo un vertiginoso incremento de órganos constitucionales autónomos. Así, se incorporaron a la Constitución el Instituto Federal Electoral en 1996 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999, órganos pioneros que constituyen lo que podemos denominar “órganos autónomos de primera generación”. Más recientemente, se otorgó autonomía al Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, entre otros, siendo estos los denominados “de segunda generación”.

Cabe destacar que los órganos constitucionalmente autónomos participan en la formación de la voluntad estatal, pero carecen de soberanía. Desde un punto de vista etimológico, autonomía es una palabra de origen griego que hace referencia a la potestad de autorregularse, darse leyes a sí mismo y autogobernarse, lo cual institucionalmente alude a la facultad y competencia de ser autónomo.

Derivado de lo anterior, surge la inquietud sobre la integración y conformación de dichos órganos, y en ese sentido, la catedrática María Salvador Martínez, Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá y docente en el área de derecho constitucional de la Universidad de Alcalá y de otras prestigiadas instituciones educativas, destaca que las características primordiales con las que podemos identificar a los órganos autónomos, son las siguientes:

- En la elección de sus miembros, interviene no sólo el Gobierno, sino también el Parlamento, y otras instancias públicas, privadas e incluso los ciudadanos.
- Sus miembros no pueden ser cesados de manera discrecional por el Gobierno.
- No reciben órdenes ni instrucciones por parte de los gobernantes.
- No están sometidos a los mecanismos de control habituales de la Administración.

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció las características de estos órganos con la emisión de la siguiente Jurisprudencia Constitucional, con número de registro: 170238, P./J. 12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871, y cuyo texto señala de forma expresa:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. **Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.**

De la Jurisprudencia que antecede al presente párrafo, se pueden identificar características que bien podrían definir a un órgano autónomo, sin embargo, no se señala un mecanismo estandarizado para el nombramiento de integrantes de órganos constitucionalmente autónomos. En esta tesitura entonces, se vela por preservar un modelo en el cual prevalezca una coparticipación entre dos poderes constituidos del Estado, con una participación más activa por parte del pueblo, el cual está representado en la Asamblea de los Representantes Populares.

En ese sentido es que la presente iniciativa tiene a bien generar un equilibrio entre los poderes tradicionales y los constitucionalmente autónomos, para tal efecto, se plantean las siguientes propuestas:

- **Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información:**

Se propone generar una homologación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de objetar el nombramiento realizado para integrar el Instituto.

Actualmente en el caso de Sonora, es el Poder Ejecutivo el que emite la convocatoria y selecciona a los integrantes que habrán de integrar al Instituto para someterlos a la aprobación del Poder Legislativo de nuestra Entidad.

Si bien en el actual modelo local para integrar el Instituto se prevé la participación de dos poderes del Estado para la integración de dicho Instituto, esta propuesta también lo prevé. Sin embargo, la esencia de la modificación yace en que será el Congreso del Estado el que emita la convocatoria y lleve a cabo el proceso de selección de las ciudadanas y ciudadanos que habrán de integrar el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información.

Aunado a ello, y en armonía con la Constitución General, el Ejecutivo del Estado podrá objetar el nombramiento de la o el ciudadano que designe el Congreso para la integración, de tal manera que se sigue optando por un modelo de coparticipación entre ambos poderes del Estado y el diálogo democrático impulsado por esta regla.

Es necesario puntualizar que en la presente propuesta, el régimen transitorio en su Artículo 2 establece la renovación escalonada de las y los comisionados que habrán de integrar al Instituto. Ello en concordancia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que su artículo 38 dispone de manera precisa:

“Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos

personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.”

Mediante este artículo transitorio, velamos por una correcta integración del Instituto, pues hacemos hincapié en la importancia de mantener la autonomía del órgano garante, a fin de maximizar el cumplimiento de la garantía del derecho humano de acceso a la información consagrado en nuestra Carta Magna.

- **Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

Se reestablece la facultad de fincar indemnizaciones a los responsables para la recuperación de daños y perjuicios que afecten al erario, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno.

Esto como una medida que reforzará el actuar del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización.

- **Fiscalía General del Estado de Sonora.**

La fiscalía general de justicia del Estado de Sonora es un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta entre su amplio espectro orgánico, con la función de dos fiscales especializados, en materia anticorrupción y en delitos electorales, armonizando con ello las disposiciones establecidas en la legislación federal de la materia.

Sin embargo, con el efecto de dotar de mayor autonomía a las fiscalías especializadas, y en razón precisamente de su competencia especial, se pretende generar un

cambio, pues actualmente el o la Fiscal general en turno, tiene entre sus facultades el nombrar y remover a los Fiscales Especializados.

En otros Estados de la república, en los que ha funcionado la ampliación del espacio de autonomía de las fiscalías especializadas tales como Veracruz, Baja California y Ciudad de México, es el Poder Legislativo quien nombra a los Fiscales Especializados, pudiendo ser éstos objetados por parte del Poder Ejecutivo. Bajo esta modalidad, se involucra la participación de dos poderes para lograr la conformación de dichas fiscalías, siendo uno de ellos integrado por los representantes populares.

El 28 de noviembre de 2016, mediante publicación en el B.O. 43, sección II, se creó la Fiscalía con carácter de órgano autónomo, pero se estableció que tanto el nombramiento del Fiscal General como de los Fiscales Especializados, serían realizados por parte del Poder Ejecutivo con la facultad del Poder Legislativo para objetar en su caso, dichos nombramientos.

Posteriormente, se publicó la Ley 102 en el B.O. Edición Especial con fecha de 13 de enero de 2017 en el que se modificaron diversos conceptos de la ley, en especial el mecanismo para nombrar e integrar dicha Fiscalía.

Actualmente el nombramiento de la titularidad de la Fiscalía General del Estado es facultad de la legislatura, pero el nombramiento de las o los titulares de las Fiscalías Especializadas son competencia directa de la o el titular de la Fiscalía General del Estado en turno, por lo que la propuesta pretende que sea la ciudadanía mediante la Asamblea de Representantes Populares, quien designe los cargos de las o los titularidades en mención. Ello para el efecto de que el eventual nombramiento de las fiscalías especializadas, pasé por el proceso de auscultación necesario que garantice un ejercicio serio, honesto y responsable de esos cargos por parte de las personas designadas para desempeñarlos.

- **Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas.**

Se plantea la eliminación de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas (SEMARA) derivado de un análisis a la legislación de la materia, pero, sobre todo, del desempeño de la misma.

En el caso particular del Estado de Sonora, la SEMARA se crea con fecha del 13 de enero del 2017 mediante la publicación de la Ley 102 en el B.O. Edición Especial y posteriormente se fortalece su marco normativo en la Constitución Local adicionando un artículo 67 TER mediante publicación de la Ley 288 publicada en el B.O. 13, sección II, de fecha 13 de agosto de 2018.

La Sala, además de tener las facultades que se establecen en el artículo 67 TER forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, sin embargo, la Constitución General no lo contempla dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual a la letra dice:

“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

*I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del **Tribunal Federal de Justicia Administrativa**; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana...”*

Desde esta perspectiva, se entiende que su creación responde a una generación innecesaria de más burocracia superflua y redundante, dado que las entidades federativas no

están obligadas a contar con una Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas para la instalación de un Sistema Estatal Anticorrupción.

En esa misma tesitura, en la misma Constitución General en el Artículo 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata a los Estados a instituir Tribunales de Justicia Administrativa, el cual a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I al IV...

Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las

Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;”

De lo anterior se desprende la obligatoriedad de las Entidades Federativas para instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos, y en su caso, recursos contra sus resoluciones.

No obstante, en el caso del Estado de Sonora, se crea también una sala, la cual desde su creación ha representado una erogación de recurso público por más de \$122.4 millones de pesos, que no representan un avance en la tramitación y resolución de los procedimientos para los cuales fue creada exprofeso.

Ahora bien, es preocupante observar como la Constitución del Estado de Sonora ha sido un instrumento mediante el cual se puedan establecer disposiciones con un espíritu que dista mucho de la voluntad popular, es decir, nuestra Constitución ha sido utilizada para elevar a rango constitucional, diversas disposiciones orgánicas que no solo no constituyen normas constitucionales sino que la estorban en su entendimiento, manejo, comprensión e interpretación, disposiciones orgánicas que por su propia naturaleza, deben de regularse en leyes secundarias diseñadas precisamente para acogerlas.

Por desgracia, se ha normalizado hasta cierto punto la práctica perniciosa de cargar a la Constitución Local con disposiciones que pueden ser calificadas de carácter político, con la intención de dificultar la modificación de las mismas, puesto que la reforma a la Constitución Local, por su propia naturaleza y por el lugar que ocupa en nuestra estructura y jerarquía de normas, es un proceso más riguroso que el modificar un ordenamiento secundario.

En esa tesitura, Legislaturas que anteceden a la actual, han elevado a rango constitucional diversas disposiciones de carácter reglamentario del Congreso del Estado, las

cuales por su condición, deben de ser reguladas en una Ley secundaria, como ejemplo se exponen las siguientes:

- Prohibición para presidir comisiones dictaminadoras (Art. 50 Constitución Local)
- Reglamentación orgánica del Poder Legislativo (Art. 64 Constitución Local)

Lo anterior atenta contra la esencia de una Constitución, la cual se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y establece las normas primarias que habrán de regir y/o regular un Estado.

Como consecuencia de la adición de los preceptos reglamentarios que anteceden a la Constitución Local, el Congreso del Estado no tiene una libertad configurativa plena, pues cada cambio que se deba de realizar al interior del Poder Legislativo debe de estar en concordancia con lo que establece la Constitución Local. Si bien los preceptos mencionados son de carácter orgánico y deben de estar regulados en su correspondiente ley secundaria, estos se establecen en la Constitución Local respondiendo a una coyuntura político y para asegurar un correcto funcionamiento al interior del Poder Legislativo.

Es imperativo eliminar de la Constitución Local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo mediante la imposición de mecanismos elevados a rango Constitucional en detrimento de la Asamblea de Representantes Populares.

En particular la fracción XXXI del Artículo 64 de la Constitución Local, ha sido sujeto a una serie de modificaciones que históricamente responden a coyunturas políticas.

A continuación, se muestra una tabla en la cual se ilustra evolución cronológica del ordenamiento en comento:

Año	Texto
Artículo 64, fracción XXXI	

<p>12 de agosto 1978</p>	<p>XXXI. Para expedir la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma.</p> <p>La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.</p>
<p>27 de noviembre 2017</p>	<p>XXXI. Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma.</p> <p>El titular del Órgano de Control Interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado, serán designados y removidos por al menos las dos terceras partes de sus integrantes.</p> <p>La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.</p>
<p>13 de agosto 2018</p>	<p>XXXI. Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma.</p> <p>Para garantizar el servicio profesional de carrera en el Poder Legislativo, el titular del Órgano de Control Interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado, serán designados por las dos terceras partes del Congreso y removidos únicamente por las causas graves determinadas por el Tribunal de Justicia Administrativa.</p> <p>La Contraloría Interna contará con funciones para la instauración de procedimientos administrativos y proponer la instancia correspondiente las sanciones; para ello, podrá establecer un sistema de quejas y denuncias así como aplicar normas en materia de control y evaluación.</p>

	<p>El Congreso del Estado contará, al menos, con las unidades administrativas siguientes:</p> <p>a) La Oficialía Mayor, cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: formular y proponer el anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado, realizar las adquisiciones, obras públicas, servicios y suministros del Congreso, así como vigilar, examinar y custodiar el ejercicio de los recursos públicos y la documentación que sirva como soporte de los mismos, incluyendo la firma y resguardo de los nombramientos de los servidores públicos del Congreso.</p> <p>b) Dirección General Administrativa, cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: recopilar, agrupar y clasificar toda la información financiera, contable y de recursos humanos del Congreso del Estado, así como gestionar, tramitar, diligenciar y recibir los recursos financieros de la Secretaría de Hacienda a efecto de realizar los pagos de dietas y sueldos, mantenimiento, servicios, arrendamientos, suministros y adquisiciones, incluyendo la facultad de celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios. Asimismo será la encargada de realizar las transferencias de fondos y de establecer y operar los procedimientos para la recepción y control de los ingresos necesarios para la ejecución de programas y subprogramas a cargo del Congreso del Estado.</p> <p>c) Dirección General Jurídica, cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: representar jurídicamente al Congreso del Estado, a la Diputación Permanente, comisiones y diputados, brindando asesoría jurídica y apoyo de manera presencial y en la redacción de todo tipo de documentos, así como a guardar, conservar y custodiar todos los expedientes que se formen con la tramitación de comunicaciones oficiales, leyes, decretos,</p>
--	---

	<p>acuerdos, documentos administrativos y judiciales, independientemente de su denominación.</p> <p>d) La Contraloría Interna cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: instaurar, conocer y desahogar procedimientos administrativos y proponer a la instancia correspondiente las sanciones; para ello, podrá establecer un sistema de quejas y denuncias así como aplicar normas en materia de control y evaluación.</p> <p>e) La Dirección General del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: la investigación, estudio y análisis legislativo, colaborar en la elaboración de iniciativas y promover la vinculación del Congreso del Estado con el sector académico, público, privado y social.</p> <p>f) La Dirección General de Comunicación Social cuyas atribuciones serán, cuando menos, las siguientes: elaborar el programa anual de comunicación social, contemplando la difusión oportuna, objetiva y profesional de las actividades del Congreso y de sus integrantes, a efecto de mejorar la percepción social respecto a las tareas legislativas y la imagen profesional de los diputados.</p> <p>Las unidades administrativas señaladas en la presente fracción, no podrán variar sustancialmente. No se podrán crear unidades administrativas cuyas funciones o atribuciones dupliquen, suplan o sustituyan las referidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) anteriores, independientemente de la denominación que se les atribuya.</p>
--	---

Si bien es una adición que se realizó observando un estricto sentido de legalidad, pues se siguieron de manera rigurosa los procedimientos que la ley señala para su adicción,

este evento respondió más a una coyuntura política que a un reclamo social, o una adecuación que respondiera a la evolución de la sociedad del Estado.

En ese mismo tenor, se considera también la remisión del proceso de suspensión de Ayuntamientos, declaración de desaparición de los mismos y la revocación del mandato de algún miembro de los Ayuntamientos a la ley secundaria en materia municipal.

Se propone también que el Congreso pueda conocer, revisar, aprobar y no aprobar las cuentas públicas del Estado, función que es de vital importancia para la vida institucional del Estado. Mediante las cuentas públicas la ciudadanía puede verificar como es que se ejerce el presupuesto del Estado y observar en su caso, las anomalías que se puedan presentar en una Administración. Lo anterior evidentemente responde a una facultad orgánica que es responsabilidad del congreso del Estado ejercer, mediante la asistencia de los órganos técnicos autónomos que se encargarán de los dictámenes, estudios, análisis y exámenes correspondientes.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una Jurisprudencia Constitucional al respecto, bajo el registro digital: 190672, P./J. 140/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1114:

CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES.

Para determinar el alcance de las facultades que competen a los Congresos Locales en la revisión de las cuentas públicas de los Gobiernos Estatales y de los Municipios, así como el procedimiento a que han de sujetarse, debe atenderse no sólo a las prescripciones relativas de la Constitución Federal, sino también a lo dispuesto por las Constituciones y leyes locales, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental,

los poderes de los Estados se organizarán conforme a lo previsto en la Constitución de cada uno de ellos, pero sujetándose a las estipulaciones de la Constitución Federal.

Con base a la Jurisprudencia que antecede, se otorga a las Entidades Federativas la facultad para determinar el alcance que tendrán los Congresos Locales en términos de la revisión de las Cuentas Públicas, de tal manera que bajo la óptica de estado, es primordial fortalecer las determinaciones que pueda o no tomar la Asamblea de Representantes Populares del Estado, en cuyo caso, se propone el conocimiento, revisión, aprobación o reprobación de las mismas.

En lo referente a la división de poderes, disposición consagrada en nuestra carta magna, se hace alusión a la siguiente Jurisprudencia Constitucional con registro digital 165811, P./J. 111/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1242

DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado que el Constituyente local establezca funciones a favor de un determinado Poder, que en términos generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo anterior **se deduce que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas**

preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desempeño.

En virtud de lo anterior, se han identificado disposiciones en la Constitución Local, que si bien en un sentido teleológico, la Legislatura que aprobó las modificaciones planteaba generar una esfera de colaboración entre ambos poderes, el resultado de dichas adecuaciones a la Constitución Local no resultó en ese sentido.

Otorgar la facultad de observar acuerdos del Poder Legislativo secundado por un mecanismo específico para proceder cuando esto ocurra, aunado también a que las dependencias de la administración pública directa y las entidades creadas por decreto legal o del Ejecutivo, solamente podrán ser suprimidas o modificadas por iniciativa del propio Ejecutivo, coarta la función del Legislador, pues está impedido a realizar su poder reformador tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como en decretos que versen sobre entidades creadas por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido también se propone la eliminación de dichas disposiciones bajo una óptica de estado, la cual se basa en una organización política imparcial, en el respeto a los diferentes poderes en los que se divide el Estado y en la constante procuración de un verdadero Estado de Derecho.

Retomando el principio de la presente exposición de motivos, es imperante destacar que la piedra angular de la presente propuesta, yace en la necesidad de armonizar los requisitos para reformar la Constitución Local con la Constitución General.

Se detectan dos áreas de oportunidad en el artículo 163 de la Constitución Local, misma que dispone lo siguiente:

“Artículo 163. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado.

Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 60 días a partir de que el Congreso se las notifique.”

Del Artículo que antecede, se desprenden varios factores:

- I. Dos terceras partes de los miembros del Congreso.*
- II. Dos terceras partes de los Ayuntamientos.*
- III. Término de 60 días para pronunciarse.*

La Constitución General establece en su artículo 135 lo siguiente:

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

A diferencia de nuestra Constitución Local, la Constitución General puede ser reformada por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso de la Unión.

La segunda etapa requiere una aprobación de la mayoría de las legislaturas, generando un criterio más flexible, lo cual permite un continuo perfeccionamiento del andamiaje jurídico que regula a las y los mexicanos.

Es alarmante que el mecanismo establecido en nuestra Constitución sea tan riguroso, lo cual tiene un impacto negativo directamente sobre la ciudadanía dado que dificulta la actualización de nuestro marco normativo con respecto a las demandas sociales, aunado a que la armonización con nuestra carta magna se ve mermada de igual manera por un sistema el cual nos podría situar en posibles omisiones legislativas.

En este contexto, la viabilidad jurídica para que la presente propuesta pueda ser aprobada es acorde al contexto político y la realidad actual que se vive en nuestro Estado, por lo que es de vital importancia responder a las necesidades de esta coyuntura, ya que se estarían aprobando los cimientos para un fortalecimiento del texto constitucional, así como el de abonar a la gobernabilidad en el Estado.

No cabe duda que la presente iniciativa considera diversos puntos torales para la vida política del Estado y es menester de las y los integrantes de la LXIII Legislatura anteponer nuestra vocación de servicio que como Representantes Populares nos define, y velar por generar condiciones óptimas que permitan el desarrollo político y social de nuestro Estado de una manera afable.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**LEY
QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA**

LEY

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO: **Se reforman** los artículos 2o, apartado A, fracción V; 64, fracciones XIII, párrafo primero y segundo, XIV, XVIII, XXIV-BIS A, XXV y XXXI; 65, párrafo primero; 67, inciso G y, párrafo sexto y Octavo; 67 BIS, párrafo segundo; 80, fracción III; 97; 98; 116, párrafo primero y segundo; 40 y 143; **se derogan** los artículos 2o, apartado A, fracción VI, párrafo sexto y séptimo; artículo 50, párrafo segundo; 64, fracción XXII, párrafo octavo, fracción XXIII; 67, inciso A, párrafo segundo; 67 BIS, párrafo cuarto; Artículo 67 Ter; artículo 81, párrafo cuarto; artículo 97, párrafo séptimo; 116, párrafo tercero; 117, párrafo quinto y artículo 166, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.

En materia de información pública:

APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes.

...

...

I a la IV.- ...

V.- El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, imparcial, colegiado e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, que será responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos de la legislación vigente.

En su funcionamiento el organismo garante se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el ámbito de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, sin perjuicio de las demás atribuciones que fijen las leyes. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de los actos de autoridad que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezcan las leyes en la materia.

Las resoluciones del organismo serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y contra ellas sólo procederán los mecanismos de impugnación expresamente señalados en la ley de la materia.

El organismo garante estará conformado por tres comisionados que serán nombrados por las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

El comisionado presidente ejecutará las decisiones del organismo garante y será su representante legal.

El organismo garante contará con facultades para imponer medidas de apremio a los sujetos obligados para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, en los términos de lo que establezca la ley de la materia.

APARTADO B.- En la designación de los comisionados del organismo garante, el Congreso del Estado deberá asegurar la participación ciudadana y su realización conforme al siguiente procedimiento:

I.- El Congreso del Estado emitirá y difundirá en los medios de comunicación una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado, pueda registrarse dentro del plazo de diez días naturales posteriores a la expedición de la misma;

II.- Concluido el plazo para el registro, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dentro de los cinco días naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en que se hizo pública la convocatoria, en el que señale el número de aspirantes registrados y determine quiénes cumplieron con los requisitos exigidos en la convocatoria. De la misma manera, en la citada lista se establecerá y hará pública la posibilidad de que, dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación de la lista, cualquier persona interesada, con apoyo en

pruebas suficientes, pueda presentar comentarios y objeciones a la candidatura de cualquiera de los aspirantes;

III.- Los aspirantes señalados en la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la recepción de comentarios y objeciones serán convocados a comparecer en audiencia ante la comisión legislativa correspondiente;

IV.- Concluido el período de comparencias, la comisión correspondiente, tomando en consideración la opinión de la sociedad expresada en los términos de la fracción III que antecede, realizará la propuesta de designación de comisionados, especificando a la o el ciudadano que habrá de fungir como Presidente del Órgano Garante, mediante el dictamen correspondiente, y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación; y

V.- El dictamen que presente la comisión correspondiente se aprobará cuando obtenga el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión convocada para tal efecto. En caso de que el dictamen no hubiera obtenido la votación requerida para su aprobación, la comisión deberá presentar otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la aprobación correspondiente.

En todo caso, el dictamen que presente la comisión correspondiente en los términos antes señalados, deberá hacerse en los términos del Artículo 53 de esta Constitución

El nombramiento podrá ser objetado por el Poder Ejecutivo en un plazo de diez días hábiles. Si el Poder Ejecutivo no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por la Legislatura.

ARTICULO 50.- . . .

Se deroga.

ARTICULO 64.- . . .

I a la XII.- . . .

XIII.-Para suprimir aquellos Municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Decretada la extinción se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán comprendidos los Municipios desaparecidos.

Para que la supresión tenga efecto se oirá al Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y al Ejecutivo del Estado.

XIII BIS.- . . .

XIV.- Para trasladar, provisionalmente, fuera de la ciudad de Hermosillo, la residencia de los Poderes del Estado.

XV.- Derogada.

XVI a la XVII.- . . .

XVIII.- Para aprobar o rechazar los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, que sean propuestos por el Ejecutivo.

XIX a la XXI B.- . . .

XXII.- Para discutir, modificar, aprobar o rechazar **por el voto de la mayoría de los integrantes de la Legislatura**, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, en forma física y en formatos electrónicos de fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del proyecto del Presupuesto de Egresos.

...

...

...

...

...

...

...

XXIII.- Se deroga.

XXIV la XXIV- BIS.- . . .

XXIV-BIS A.- Para legislar sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación; así como la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

XXV.- Para conocer, revisar y aprobar o reprobar el resultado de la revisión de las Cuentas Públicas del Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y los Ayuntamientos. La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas será hecha por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados en los

programas, a cuya ejecución se hayan asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

El Congreso realizará su labor fiscalizadora con base en el informe de resultados que le presente el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

XXVI a la XXIV.- . . .

XXX.- Se deroga.

XXXI.- Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma; privilegiando el servicio profesional de carrera del Poder Legislativo.

La ley y los reglamentos a que se refiere esta fracción no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.

XXXII a la XLIV.- . . .

ARTICULO 65.- El mismo día en que el Congreso deba cerrar sus sesiones, antes de entrar en receso nombrará una Diputación Permanente en los términos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora establezca.

. . .

ARTICULO 67.- . . .

Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización:

A) al F) . . .

G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario, fincando a los responsables las indemnizaciones correspondientes, cuando sea detectada esta situación en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno competente. Asimismo, derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada competente, en los términos de esta Constitución y la ley.

H) ...

...

...

...

El Auditor Mayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo siete años.

...

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización contará con un Órgano de Control Interno cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del pleno del Congreso del Estado correspondiente, a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por un término de 4 años.

...

...

ARTÍCULO 67 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Este Tribunal, tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales y demás competencias que otorgue la ley.

El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará mediante una Sala Superior, la cual se compondrá de cinco Magistrados que serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo y ratificados mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que corresponda. Durarán en su encargo nueve años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

ARTÍCULO 67 TER.- Se Deroga

ARTICULO 80.- . . .

I y II.- ...

III.- Oponerse y hacer observaciones a los acuerdos del Congreso en que se le pidan informes sobre asuntos públicos;

IV a la XIII...

ARTICULO 81.- . . .

...

...

Se deroga

ARTÍCULO 97.- El Ministerio Público del Estado de Sonora se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Corresponde al Ministerio del Estado la persecución, de todos los delitos, y por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurando que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General de Justicia del Estado contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y anticorrupción, las cuales tendrán autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción, propondrán al Fiscal General de Justicia del Estado su organización interna, el cual autorizará lo conducente, de conformidad con la suficiencia presupuestal de dicha dependencia.

Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción, ejercerán la acción penal, previo acuerdo y autorización del Fiscal General de Justicia del Estado.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley y su respectiva reglamentación. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal General o por el servidor público en quien se delegue esta facultad.

ARTÍCULO 98.- El Fiscal General durará en su encargo nueve años. Los Fiscales Especializados durarán en su encargo cuatro años con posibilidad de ser ratificados por las dos terceras partes de los presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado por un periodo más.

El Fiscal y Fiscales Especializados serán designados y removidos conforme a lo siguiente:

I.- A partir de la ausencia definitiva, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, una vez recibida la lista referida en el párrafo anterior, contará con diez días para validar la lista de candidatos o en su caso, remitir sus observaciones al Congreso del Estado para que éste proceda a formular una nueva propuesta dentro del mismo plazo referido en el párrafo anterior, respecto de los candidatos que no hayan sido validados.

Una vez que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado valide la lista propuesta por el Congreso del Estado, la remitirá al titular del Poder Ejecutivo.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo de treinta días a partir de la ausencia definitiva, enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente a quien habrá de ejercer las funciones correspondientes, hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el ciudadano designado podrá formar parte de la terna.

II.- Una vez que el Ejecutivo reciba la lista validada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado.

III.- El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar de entre los candidatos validados por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de la lista que señala la fracción I.

Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

IV.- El Fiscal General de Justicia del Estado y los Fiscales Especializados podrán ser removidos por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

V.- En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción según sea el caso.

VI.- Las ausencias del Fiscal General de Justicia del Estado y de los Fiscales Especializados serán suplidas en los términos que determinó la ley.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General de Justicia del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de Justicia del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

ARTICULO 116.- El cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia solamente es renunciable por causa grave calificada por el Congreso del Estado.

Las licencias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; las que excedan de ese tiempo podrán concederse por la Legislatura local y, en sus recesos, por la Diputación Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

ARTICULO 117.- La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en Pleno, Salas o Comisiones, la competencia de los Tribunales Regionales de Circuito y la de los Juzgados de Primera Instancia y Locales, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se regirán por lo que dispongan las leyes.

El Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en Pleno, determinará el número, división en circuitos, jurisdicción territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia.

Asimismo, el Pleno elegirá de entre sus miembros, en los plazos que determine la ley, al Presidente del Supremo Tribunal Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior, salvo que se trate de una suplencia; en cuyo caso el suplente si podrá ser reelecto.

El Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de su Presidente, deberá rendir al Congreso y al Gobernador del Estado, los informes, que le soliciten sobre el ramo judicial.

ARTÍCULO 140.- La Ley de Gobierno y Administración Municipal establecerá las bases y señalará las causas para que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, pueda suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, así como suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros en lo individual, por alguna causa grave prevista por la Ley. En el procedimiento que se substancie, los miembros del Ayuntamiento involucrados tendrán oportunidad suficiente para rendir pruebas y formular los alegatos que consideren convenientes. El Gobernador del Estado tendrá la participación que le asigne la Ley.

ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de

Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal.

En los términos y condiciones que establezca la Ley respectiva los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Las causas graves a las que se refiere esta Constitución para la remoción los cargos públicos relacionados a los titulares de los Organismos Constitucionales Autónomos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo serán las que determine la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

ARTÍCULO 143 B.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I a la II.- . . .

III.- ...

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

...

...

IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

...

...

...

ARTÍCULO 163.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del Estado.

Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 45 días naturales a partir de que el Congreso se las notifique. En caso de no hacerlo, se entenderá como aprobación tácita.

ARTÍCULO 166.- Se deroga

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del Estado de Sonora.

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobado la presente Ley por cuando menos las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Respecto a la designación de los Comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Congreso del Estado contará con un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para publicar en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y en el Boletín Oficial del Estado de Sonora las bases y convocatoria para elegir a las y los ciudadanos que integrarán el referido Instituto.

Para asegurar la imparcialidad, autonomía y a lo establecido en la presente Ley, los Comisionados serán nombrados por los siguientes periodos:

Presidente – 7 años

Comisionado – 5 años

Comisionado – 3 años

ARTÍCULO TERCERO.- El titular del Órgano de Control Interno, Oficial Mayor y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado deberán ser ratificados por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura en la siguiente

sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente Ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la Legislatura por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se designarán a los encargados de despacho.

Posteriormente a la designación de los encargados de despacho; el Congreso del Estado en un plazo máximo de 15 días naturales deberá designar con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura a los nuevos funcionarios.

Dentro del plazo de 60 días naturales siguientes se emitirán las bases para la implementación del Servicio Profesional de Carrera en el Poder Legislativo del Estado, que deberá contener como requisitos, no haber sido condenado por sentencia firme por violencia política de género o pensión alimenticia.

ARTÍCULO CUARTO. - La Mesa Directiva del Congreso del Estado electa para el mes de septiembre del 2021 seguirá en funciones hasta que termine el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.

El Congreso del Estado contará con un plazo no mayor a 15 días naturales para conformar e integrar las comisiones en los términos de su propia Ley Orgánica.

ARTÍCULO QUINTO. - Las disposiciones relativas a la competencia que se le otorga al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los procedimientos de responsabilidad iniciados con anterioridad a la entrada en vigor la presente Ley, en sustitución de la Sala Especializada Anticorrupción, entrarán en vigor el mismo día que la presente Ley. Dichos procedimientos serán distribuidos entre los órganos que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de su normatividad interna.

Los Magistrados que, al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento, se encuentren en funciones en la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativa, serán separados de sus cargos en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. El Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización constitucional, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, todas las disposiciones que se refieran a la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa.

Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los bienes muebles e inmuebles y contratos celebrados por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas se transferirán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEXTO. - Los Fiscales Especializados que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán ser ratificados por al menos dos terceras partes de la Legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente Ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes

de la Legislatura, se entenderá entonces la ausencia definitiva y se estará en lo dispuesto en el Artículo 98, fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presenta Ley, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

ARTÍCULO OCTAVO. - Dentro de un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes, entre otras, a las leyes en materia Municipal, de la Fiscalía, de Transparencia, de Justicia Administrativa, de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de tal manera que dichos ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución, y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTINA CASTRO VALENZUELA
COORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
MORENA

DIP. MARÍA ALICIA GAYTÁN SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE MORENA

DIP. HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO
INTEGRANTE DE MORENA

DIP. JACOBO MENDOZA RUÍZ
INTEGRANTE DE MORENA

DIP. IVANNA CELESTE TADDEI ARRIOLA
INTEGRANTE DE MORENA

DIP. JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ MORALES
INTEGRANTE DE MORENA

**DIP. RICARDO LUGO MORENA
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. OSCAR EDUARDO CASTRO CASTRO
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. REBECA IRENE SIVA GALLARDO
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. MARÍA JESÚS CASTRO URQUIJO
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. AZALÍA GUEVARA ESPINOZA
INTEGRANTE DE MORENA**

**DIP. SEBASTIÁN ANTONIO ORDUÑO
FRAGOZA
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO**

**DIP. DIANA KARINA BARRERAS
SAMANIEGO
INTEGRANTE DE PT**

**DIP. IRAM LEOBARDO GARCÍA
INTEGRANTE DE PT**

**DIP. CLAUDIA ZULEMA BOURS CORRAL
COORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO**

**DIP. LIRIO ANAHI DEL CASTILLO
SALAZAR
INTEGRANTE DE PVEM**

**DIP.FERMÍN TRUJILLO FUENTES
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA**

**DIP. BEATRIZ COTA PONCE
INTEGRANTE PARTIDO NUEVA ALIANZA**

**DIP. PALOMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS
REPRESENTANTE PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO**

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta Soberanía, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA FIGURA DE PARLAMENTO ABIERTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO**, para lo cual fundamento su viabilidad al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La figura de esta representación popular, por su propia naturaleza, es el espacio de diálogo de la sociedad con los otros poderes e instituciones del estado; esto sin duda, obliga al poder legislativo, a actualizar, ampliar, perfeccionar y fortalecer, todos los espacios para que los ciudadanos participen, para que sean oídos y escuchados, para que se les rindan cuentas, para que se sientan cerca y encuentren sentido y valor en su vida cotidiana del trabajo que se realiza en esta importante soberanía.

Los ciudadanos han hecho manifiesto, a través de diversos medios y formas, de su interés por distintos instrumentos de democracia participativa; y de su exigencia de participación e involucramiento en la toma de decisiones que repercuten en su vida diaria.

Es preciso destacar los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020¹.

- A nivel nacional, 88.7% de la población de 15 años y más está de acuerdo en que para gobernar un país se necesita tener un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones.

- El 69.2% de la población considera que tiene los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas.

Por otro lado, tanto en esta encuesta de INEGI en comento, cómo en la edición 2020 de Ranking de Confianza en Instituciones de México, realizado por MITOFSKY², de 19 instituciones que son medidas en dicho estudio, los diputados son los penúltimos en percepción de confianza por la ciudadanía con apenas el 5.7 de nivel de confianza.,

Diversos estudios analíticos y de opinión, han señalado que existen tendencias a la baja en los niveles de confianza que tiene la población en los poderes del estado, o en el circuito político en general; y no hay duda que sin confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, difícilmente se podrá transitar hacia una eficaz gobernanza.

El inicio de esta legislatura, marca la oportunidad de actualizar la arquitectura normativa para fortalecer los mecanismos e instrumentos de participación de los

¹

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENCUCI20_Nal.pdf

² <http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1407-confianza-2020>

ciudadanos, de darle cauce a sus voces, en busca de mejores leyes para sus familias y comunidades.

Es una oportunidad de construir parlamento abierto, para ser ejemplo y mandar un mensaje muy claro sobre lo que la ciudadanía espera de nosotros: apertura, transparencia, dialogo, rendición de cuentas, ética y profesionalismo.

Es importante construir nuestra representación popular, desde la escucha activa y respetuosa a los ciudadanos, reconocer sus reclamos, darle poder a su voz y cauce legal a sus inquietudes. Es indispensable legislar escuchando y rindiendo cuentas a todas y todos los sonorenses a quienes representamos.

De ahí la importancia de fortalecer la formación y construcción de una ciudadanía plena, con las herramientas necesarias para que la actividad legislativa sea cercana, accesible, sencilla y de interés para toda la sociedad.

Estamos ante una extraordinaria oportunidad en esta nueva conformación del Congreso del Estado de Sonora, en un momento importante para tomar decisiones sobre cómo queremos definirnos como representantes populares, sobre lo que nos debe de caracterizar como legislatura; creo que en todos los presentes se comparte la aspiración de ser verdaderos representantes de los intereses de los Sonorenses y actuar en consecuencia, siempre escuchando a todos los involucrados.

Por ello, retomando prácticas internacionales que, en nuestro país, se han potencializado a partir del año 2014, donde organizaciones de la sociedad civil, de la mano de la Cámara de Senadores y de Diputados y junto con el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, firmaron la Declaratoria de la Alianza para el Parlamento Abierto³, considero oportuno sumar

³ <https://www.parlamentoabierto.mx/>

esfuerzos para contribuir con un congreso que cumpla con los principios y acciones del parlamento abierto.

La Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria es un llamado a los parlamentos nacionales, y a los órganos legislativos subnacionales y transnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMO's por sus siglas en inglés) para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario.⁴

El parlamento abierto, es comunicación entre los ciudadanos y los legisladores, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana, ética, probidad legislativa, así como el uso de tecnologías de la información.

Derivado de la conformación de dicha Alianza, se establecieron 10 principios⁵ a seguir para el monitoreo de lo que distingue a un parlamento abierto:

- 1. Derecho a la Información.** (Garantizar el derecho a la información)
- 2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.** (Promover la participación)
- 3. Información parlamentaria.** (Actualizar y publicar información sobre el quehacer legislativo)
- 4. Información presupuestal y administrativa.** (Rendición de cuentas en cuanto al gasto)
- 5. Información sobre legisladores y servidores públicos.** (Declaración Patrimonial e información de interés sobre los diputados)
- 6. Información histórica.** (Uso de un archivo histórico)
- 7. Datos abiertos y no propietario.** (Facilidad de acceso y proporción a la información)
- 8. Accesibilidad y difusión.** (Reuniones abiertas a todo público)
- 9. Conflictos de interés.** (Regular, ordenar y transparentar las acciones de cabildeo)
- 10. Legislan a favor del gobierno abierto.** (en otros poderes y niveles de gobierno)

⁴ <https://www.parlamentoabierto.mx/declaracion/>

⁵ <https://www.parlamentoabierto.mx/principios/>

Es con base en esos 10 principios, como se propone la implementación del modelo de parlamento abierto en el Congreso del Estado de Sonora.

Por tal motivo, con esta primera iniciativa, se pretende elevar a rango constitucional, la incorporación de la figura de parlamento abierto como una manera de regir la actuación del Congreso del Estado, colocando en el centro de la atención al ciudadano y utilizando intensivamente las nuevas tecnologías de la información, para estrechar los espacios que hay entre ciudadanía y gobierno.

La verdad es que, en algunas experiencias, la figura de parlamento abierto se ha visto limitada y se ha circunscrito a diversos actos públicos donde no necesariamente se recogen e integran las opiniones de la ciudadanía.

El modelo de parlamento abierto del Congreso del Estado, será una nueva visión de los diputados locales, para hacer del poder legislativo un espacio de participación ciudadana, con políticas de datos abiertos, donde atendamos las solicitudes de la ciudadanía y proporcionemos la información que requieran de manera sencilla; para garantizar la apertura de la información sobre el ejercicio presupuestario; con información accesible sobre la actuación de cada legislador, dando a conocer la labor legislativa y explicando sus procesos y sus beneficios a la sociedad.

Por último, señalar que las entidades federativas donde han incorporado la figura de parlamento abierto en sus constituciones locales son Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

LEY

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTICULO 29.- El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada "CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA", el cual se regirá por los principios de parlamento abierto, en los términos de su propia Ley Orgánica.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en su caso de resultar aprobada la presente Ley por las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente resolución y se dispense el trámite de Comisión, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora a 09 de septiembre del 2021.

DIPUTADA NATALIA RIVERA GRIJALVA

Hermosillo, Sonora a 09 de septiembre del 2021.

**H. ASAMBLEA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA.
PRESENTE.-**

Los suscritos integrantes del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura**, en pleno uso de nuestro derecho de iniciativa, previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta Soberanía, con objeto de someter a su consideración la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA; Y DE LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE SONORA**, fundamentando la procedencia de la misma, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Legislaturas de los Estados revisarán y fiscalizarán las Cuentas Públicas del Estado y Municipios. Así mismo se establece que contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes, estas disposiciones se encuentran en los artículos 115 y 116 de nuestra Carta Magna, mismos que a la letra dicen:

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

IV. *Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:*

c)..

...

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

...

Artículo 116. *El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

II. *El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.*

...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

Esta iniciativa se presenta en el marco de la transición dentro del gobierno estatal y los gobiernos municipales, que nos obliga a tener parámetros claros para llevar a cabo un análisis cabal de la cuenta pública recibida, lo cual, es imposible con la ley actual, una ley de fiscalización que pide actualizaciones urgentes y necesarias como lo son la inclusión de las auditorías especiales. Como bien lo señala el mismo Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en la propuesta de modificaciones a las disposiciones legales del informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas 2020, recientemente recibidas en este H. Congreso, manifiesta que es necesario contar con una legislación acorde con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción ya que en la medida en que exista una normatividad adecuada se podrán reducir las conductas irregulares, estableciendo una estructura más coherente y ordenada en la actuación de los sujetos de fiscalización y en general de los Servidores Públicos del Estado.

La iniciativa que hoy presentamos es con el fin de contar con una nueva Ley de Fiscalización, con el objeto de continuar con la construcción del marco jurídico, que permitan a este Poder Legislativo fortalecer sus facultades de fiscalización para contar con un sólido mecanismo de auditoría de las finanzas públicas, que auxilie el combate efectivo de la corrupción de nuestro Estado.

Si bien es cierto que la actual Ley de Fiscalización, ha sido reformada en varias ocasiones para contar con la normatividad acorde al Sistema Nacional anticorrupción y homogeneizar la Ley de Fiscalización de Sonora con la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación expedida en julio de 2016, esta iniciativa de nueva Ley además de homogeneizar los aspectos pendientes con la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación; busca tomar las mejores prácticas de fiscalización plasmadas en distintas leyes homólogas de otras Entidades Federativas, entre las que destaca la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, y atender las recomendaciones en materia de fiscalización que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Ley Modelo de Fiscalización Superior Para las Entidades Federativas.

En las Consideraciones para la Labor Legislativa, documento que forma parte de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016, presentado por la Auditoría Superior de la federación en junio de 2017⁶, se señala que en los diagnósticos previos a la creación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) se hizo especial hincapié en el riesgo que representan la atomización y, en muchos casos, la falta de coherencia entre los marcos legales que rigen la fiscalización superior en las entidades federativas, tales como las diferencias en cuanto a plazos, entrega de resultados o publicidad de los mismos, entre otros.

La armonización de estas disposiciones resultará en un marco más adecuado para que la fiscalización superior en todo el país opere de manera consistente, coordinada y planeada desde una perspectiva estratégica a nivel nacional, incrementando así su alcance y profundidad, así como asegurando la calidad de sus resultados.

La rendición de cuentas de los gobiernos municipales y del gobierno estatal sigue siendo una agenda pendiente, los niveles de endeudamiento del Estado de Sonora, ubican a nuestro Estado como la octava entidad federativa más endeuda, según el estudio Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México tercer Trimestre de 2020⁷, presentado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales se encuentran entre los 25 municipios más endeudados de México, de acuerdo al estudio Obligaciones Financieras de los Municipios de México, al tercer trimestre del 2020, presentado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados⁸, con lo que se evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico para la vigilancia del ejercicio de los recursos.

⁶ <http://informe.asf.gob.mx/Documentos/InformeGeneral/Consideraciones.pdf>

⁷ <https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0482020.pdf> Gráfica 2

⁸ <https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0502020.pdf> Gráfica 8 y Tabla 1

En este sentido, es urgente detectar los aciertos y fallas del marco normativo actual para generar un uso más racional de los recursos públicos.⁹

El IMCO y Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara decidieron redactar una Ley Modelo¹⁰ que guíe las reformas legislativas de la materia e incorpore las mejores prácticas internacionales y nacionales para que pueda cumplirse el objetivo de toda buena ley: ordenar conductas, actos y procedimientos, a través de normas claras, precisas y coherentes que generen la seguridad jurídica que requiere la fiscalización superior de la gestión financiera de los entes públicos.

De acuerdo a la exposición de motivos de esta ley Modelo, la función de fiscalización superior de la gestión financiera de los entes públicos se encuentra establecida en la mayoría de los textos constitucionales del mundo; dicha función es competencia del poder legislativo, al ser el control externo de la administración pública a cargo del poder ejecutivo. En este sentido, la fiscalización superior es uno de los instrumentos más fuertes del sistema de frenos y candados entre los poderes públicos de un Estado democrático y suele establecerse en su Carta Magna. La ley de fiscalización es una ley reglamentaria constitucional. Pero también es una ley orgánica ya que establece las competencias y atribuciones del órgano fiscalizador que se denomina “Auditoría Superior” en la mayoría de legislaciones mexicanas. Asimismo, es una ley que establece los principales procedimientos involucrados en la auditoría gubernamental y en la determinación y fincamiento de responsabilidades resarcitorias.¹¹

Siguiendo la tesitura de homologar y homogeneizar nuestros ordenamientos, cabe destacar que en el artículo 81 fracción X la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se establece como obligación a los

⁹ <https://imco.org.mx/blog/?s=ley+modelo+de+fiscalizaci3n> AUDITORIAS SUPERIORES LOCALES: Evaluaci3n de su normatividad, pr3cticas y transparencia.

¹⁰ http://imco.org.mx/es/temas/gobiernos_fiscalizacion_superior/auditorias_superiores_locales_en_mexico_evaluacion_de_su_normatividad_pract/

¹¹ http://imco.org.mx/es/temas/gobiernos_fiscalizacion_superior/auditorias_superiores_locales_en_mexico_evaluacion_de_su_normatividad_pract/

sujetos obligados el poner a disposición del público y permanentemente actualizado en sus respectivos sitios de internet los informes de resultados de las auditorías que les hubieran practicado los entes fiscalizadores, es por esto que se incluye en la nueva ley que los informes individuales sean publicados en el portal del Instituto, conforme se vayan concluyendo y no hasta que sean entregados al Congreso, con el fin de tener una máxima publicidad y transparencia.

También se pretende homologar el plazo establecido en este proyecto de Ley de Fiscalización y modificaciones Constitucionales, para la presentación de los informes trimestrales, tanto de los ayuntamientos como del Ejecutivo Estatal, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde se establecen 30 días después de terminado el trimestre de que se trate, lo que permitirá contar con información oportuna, cabe destacar que el Ejecutivo del Estado desde el cuarto informe trimestral del 2017 a la fecha, lo ha estado entregando a los 30 días de concluido el trimestre.¹²

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece en el artículo 11 fracción VI, que los entes públicos deberán asegurarse que su sistema de contabilidad gubernamental genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

En base a esta Ley y tomando en consideración la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato¹³, es que se adelanta la entrega de las cuentas públicas para el último día del mes de febrero ya que actualmente son presentadas en el mes de abril.

¹² <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/4577/ejecutivo.pdf>. Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal. Tomo Principal Poder Ejecutivo. P. 9 oficio No. 03.01-1-1007/18 del 30 de enero del 2018.

¹³

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_PO_18_dic2017.pdf. Ley de Fiscalización superior del Estado de Guanajuato artículo 20.

Con esta disposición queremos propiciar que efectivamente el Estado y Municipio generen información en tiempo real, ya que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2020, el Ejecutivo reporto un gasto total de \$69,500,789,635.31y en la Cuenta Pública por \$70,870,781,543.37, es decir hubo un incremento de \$1,369,991,908.06, este monto no es menor supera el presupuesto devengado por tres dependencias, el Ejecutivo del Estado, Secretaria de Gobierno y Secretaría de la Contraloría General. El Cuarto informe trimestral fue presentado el 30 de enero de 2021 y la Cuenta Pública el 15 de abril de 2021, pero los dos informes son a la misma fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. También hay diferencias en los ingresos y en las cuentas de Balance.¹⁴

A manera de síntesis podemos resaltar que dentro de esta nueva Ley se destaca lo siguiente:

En relación a las reformas constitucionales:

- Se modifica el procedimiento para el nombramiento del Auditor Mayor, ya no intervendrá el titular del ejecutivo ni el comité ciudadano.
- Modificación del plazo para la presentación de la Cuenta Pública
- El Congreso podrá solicitar que se incluya una auditoría específica por acuerdo de las dos terceras partes.

De la nueva Ley de fiscalización:

- Se elimina la figura del FUERO.
- Se incorpora los principios de transparencia y máxima publicidad.

¹⁴ Cifras e la cuenta Pública de la hacienda Pública Estatal. Poder Ejecutivo. Resultados Generales, información contable, presupuestaria y programática. Y de . Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal. Tomo Principal Poder Ejecutivo.

- Modificación para el plazo de informes trimestrales de 45 a 30 días, conforme a la Ley General de Contabilidad. La información se debe de publicar en el mismo plazo.
- Que el ISAF fiscalice la información financiera publicada por los entes.
- Se actualiza el requisito para el Auditor Mayor:
 - No haber sido Secretario de 1 a 3 años anteriores.
 - No haber sido condenado por delito alguno.
 - Residencia de dos años en el Estado.
 - No tener parentesco con titulares de los poderes o secretarios ni haber sido diputado.
- Modificación del plazo para presentación de Cuenta Pública de abril a FEBRERO, dos meses antes. Además de que los entes fiscalizados lo publiquen a la misma fecha de su presentación.
- Causa de remoción del auditor y adjuntos, contratar a personal que no reúna los requisitos determinados en la Ley.
- Atribuciones de la Comisión de Fiscalización:
 - Conocer los criterios, bases, circulares y normas de evaluación que emita el Instituto.
 - Recibir informe del Auditor, respecto al cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales y cuenta pública.
 - Citar al auditor mayor para conocer en lo específico el Informe de Resultados.
- El informe de Resultados deberá publicado en internet en la misma fecha que sea entregado al Congreso y los informes individuales, conforme se vayan concluyendo y no hasta el 30 de agosto.

- Conservar la documentación por 10 años o hasta que prescriban las facultades para fincar responsabilidades.
- Se elimina la condición de que se ordenen por autoridad las Auditorias forenses, para que en cualquier momento las pueda realizar el Instituto.
- Se establece la obligación de publicar el programa de auditorías modificado y difundir el avance del mismo.
- Se establece la obligación de que el ISAF informe la falta de colaboración de las entidades fiscalizadas en los informes semestrales.
- Las auditorias de seguridad pública, serán realizadas exclusivamente por el personal del Instituto y no por externos.
- El ISAF será responsable solidario por los daños y perjuicios de sus servidores públicos y sus externos.
- Se establece plazo de 30 días hábiles para que los entes fiscalizados atiendan recomendaciones.
- Se disminuye el plazo para que el ISAF se pronuncie sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados de 120 a 60 días hábiles.
- Se incluye la opción para que el Auditor mayor responda por escrito aclaraciones a los informes, otorgando un plazo de 5 días o antes de que pase el pleno.
- Los titulares de las entidades fiscalizadas, que sean citados por la Comisión, comparecerán antes de emitir el Dictamen.

- Se agrega capítulo que precisa sobre pliego de observaciones.
- Se agrega que las Tesorería estatal o municipales tienen que informar mensualmente sobre el cobro de multas o indemnizaciones. Y que el monto recuperado ira a las entidades que les causaron daño.
- Se agregan las siguientes atribuciones del ISAF:
 - Informar de las actuaciones de los externos contratados
 - Obligación de publicar en el Boletín Oficial la normatividad interna.
 - Deberá Emitir un dictamen técnico de opinión sobre la constitución y operación de los fondos.
 - Emitir opinión sobre asignaciones, ampliaciones o variaciones presupuestarias, la adquisición o variaciones de la deuda pública y todas aquellas decisiones del Congreso que tengan impacto sobre la gestión financiera.
 - Establecer los formatos para la integración de las Cuentas Públicas. Y lineamientos para estandarización de los formatos impresos y electrónicos.
- Prohibición al Auditor Mayor para ocupar cargos o comisiones en el Gobierno del Estado, municipios y poderes dentro de los dos a cinco años posteriores al término de su encargo.
- Se establece la obligación para que los titulares de las áreas del ISAF, cuenten con título.
- Dar derecho de audiencia al Auditor Mayor o adjunto cuando sea propuesta su remoción.

- El ISAF tendrá un plazo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes presentadas por la sociedad civil para incluir auditorías en el programa. Las auditorías realizadas deberán ser incluidas en el Informe de Resultados.
- Se agrega capítulo de Consejo Ciudadano de Fiscalización.
- Se elimina el requisito de que la auditorías en tiempo real sean a solicitud del sujeto fiscalizado.
- Se agrega apartado relativo a la revisión financiera trimestral.
- Se agrega inciso para puntualizar la auditoría a servicios personales.
- Se agregó fracción que indica que el sistema de calificación deberá ser del conocimiento del Congreso para que envíe observaciones al mismo. Que sea vinculante por mayoría que anualmente se defina antes de que inicie el ejercicio.
- Se agrega artículo para que el ISAF, realice un Informe de Avance de Gestión Financiera del Estado, al segundo trimestre, que tendrá que ser entregado en agosto.

La importancia de esta iniciativa radica en detener la inercia de la simulación en la fiscalización de los recursos públicos, año con año se fiscalizan entes públicos, se elaboran observaciones y se generan informes sin que se logre una verdadera fiscalización, profunda y a conciencia, este Congreso debe aprovechar la facultad otorgada por nuestra Carta Magna y buscar realizar un ejercicio de revisión de cuentas integro, digno y transparente, que genere confianza de nuestro actuar en las y los sonorenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyectos de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA.

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXV BIS al artículo 64; y se reforman los artículos 67, inciso h), 79 fracciones VII y XII, y 136 fracción XXIV, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTICULO 64.-...

XXV BIS.- El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, podrá solicitar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que se practiquen auditorías a sujetos de fiscalización para que sean incluidas en el programa anual de auditorías.

El acuerdo señalará el sujeto de fiscalización, tipo, alcance, período y el momento en que la auditoría debe iniciarse.

ARTÍCULO 67.-...

h)...

...

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política expedirá la convocatoria pública correspondiente, cuarenta y cinco días naturales antes de que termine el encargo el Auditor en funciones.

La convocatoria será abierta y dirigida a todos los ciudadanos residentes en el Estado de Sonora, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.

I. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante un período de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, las propuestas y solicitudes para ocupar el cargo de Auditor Mayor; las que se acompañarán con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley de Fiscalización Superior. La convocatoria deberá ser publicada en las páginas de internet del Congreso, de la Auditoría del Estado y en los dos periódicos de mayor circulación en el Estado;

II. Concluido el plazo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes, dicha Comisión procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de éstas cumplen con los requisitos que señala la ley;

III. Agotado el plazo señalado en la fracción anterior, dentro de los diez días hábiles siguientes, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política entrevistará públicamente por separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos; y

IV. Con base en la evaluación de la documentación y del resultado de las entrevistas, dicha Comisión procederá a emitir, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, una terna que deberá presentarse al pleno del Congreso.

El Congreso designará de entre los integrantes de la terna, a quien deba desempeñar el cargo de Auditor Mayor.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la votación requerida, el Pleno del Congreso instruirá a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que presente una nueva terna en la que no podrán formar parte los integrantes de la terna anterior. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política hasta en tanto sea aprobado el nombramiento referido, podrá presentar nuevas ternas en cualquier momento.

En caso de que los integrantes del Poder Legislativo incurran en omisiones en el procedimiento para la designación del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se estará a lo dispuesto en la Ley Estatal de responsabilidades.

ARTICULO 79.-...

VII.- Presentar cada año ante el Congreso, durante la primera quincena del mes de noviembre, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, y el día **28 de febrero de cada año, la cuenta de gastos del año anterior, y**

XII. Autorizar, por sí o por conducto del Secretario de Hacienda, la transferencia, reasignación de recursos y otorgar ampliaciones respecto de los montos originales asignados a los programas que integran el Presupuesto de Egresos.

La Secretaría de Hacienda, por conducto de sus áreas competentes, preparará un informe trimestral de la evolución de las finanzas públicas, que incluya el comportamiento de los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, el avance de los programas de inversión, directa y coordinada, las participaciones entregadas a los municipios y la posición de la deuda pública consolidada, así como las modificaciones que sufran los activos del patrimonio del Estado, el cual será remitido al Congreso del Estado, **dentro de los 30 días** siguientes al cierre del trimestre, debiéndose publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado por el

Ejecutivo. Los informes trimestrales adquirirán el carácter **parcial** y éstos se considerarán consolidados hasta la presentación formal de la cuenta pública anual.

ARTÍCULO 136.-...

XXIV. Someter al examen del Congreso, anualmente, el día **28 de febrero** de cada año, sus cuentas públicas del año anterior.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO: Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.

LEY

DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Sonora.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto:

I.- Regular la revisión, auditoria y fiscalización superior de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, mediante la revisión, auditoria y fiscalización de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo a las entidades de la administración pública estatal y municipal, los organismos constitucional y legalmente autónomos y cualquier ente público estatal o municipal, así como cualquier persona de derecho público o privado que recaude, administre, maneje, custodie, aplique o ejerza recursos públicos;

II.- Establecer la organización, funcionamiento y atribuciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley Estatal de Responsabilidades;

III.- Determinar la forma en que se realizará la verificación de la aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales y estatales, así como el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios; y

IV.- Definir las situaciones irregulares que ameritarán denuncia en términos de esta Ley y la determinación de medidas disciplinarias a los sujetos de fiscalización por infracciones a esta Ley, así como atender a los actos de fiscalización emitidos por la autoridad competente en términos del artículo 1º, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta ley se entiende por:

I.- Poderes del Estado: Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Sonora;

II.- Congreso: El Congreso del Estado de Sonora;

III.- Comisión de Fiscalización: La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora;

IV.- Instituto: El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización;

V.- Ayuntamientos: El órgano de gobierno, incluyendo sus dependencias y entidades de los municipios;

VI.- Fiscalización Superior: Facultad para conocer, revisar, auditar y evaluar el uso y aplicación de los recursos públicos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, a cargo del Instituto;

VII.- Pliego de Observaciones: Documento que se emite para la notificación de observaciones no solventadas o solventadas en forma parcial las cuales resultan de los proceso de fiscalización de las cuentas públicas e información trimestral del estado y los municipios y que fueron notificados en los informes individuales;

VIII.- Recomendaciones: Medidas que el Instituto formula, tendientes a prevenir o corregir las irregularidades y deficiencias detectadas como consecuencia de la fiscalización superior a los sujetos de fiscalización;

IX.- Daño Patrimonial: El quebranto, menoscabo, daño o perjuicio que se cause a la hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de fiscalización, cuantificable en dinero, generado por una conducta activa u omisa en la que se sustraen de manera directa o indirecta recursos económicos públicos asignados para determinado fin, dándole diverso aprovechamiento

equivocado o indebido distinto para el que fue aprobado, por parte de servidores públicos o terceros ajenos a la función pública;

X.- Servidores Públicos: Los señalados en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora;

XI.- Cuenta Pública: Las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y gobiernos municipales a que se refieren los artículos 79, fracción VII y 136, fracción XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y cuyo contenido se establecen en los artículos 47 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);

XII.- Auditorías: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada, la cual preferentemente será en el domicilio del sujeto fiscalizado, o en su caso, en las instalaciones del Instituto;

XIII.- Informes Individuales: Son informes de cada una de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados;

XIV.- Pliego de Presuntas Responsabilidades: Documento que se emite con motivo de la no Solventación del pliego de observaciones y que se constituyen en responsabilidad por falta administrativa, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, o cualquier disposición legal, relativa al manejo, custodia y ejercicio del gasto público así como las disposiciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación, seguimiento, registro y control del gasto público;

XV.- Sistema Nacional de Fiscalización: Mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno;

XVI.- Normas de Auditoría Gubernamental: Son el elemento básico que fija las pautas técnicas y metodológicas de la auditoría gubernamental, constituyen un medio técnico para fortalecer y estandarizar el ejercicio profesional del auditor gubernamental;

XVII.- Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización: Marco Normativo que contiene los principios fundamentales de auditoría gubernamental, los requisitos previos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de los organismos auditores;

XVIII.- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría;

XIX.- Unidad de Medida y Actualización: El valor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la materia, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes;

XX.- Procesos concluidos: Cualquier acción que se haya realizado durante el año fiscal en curso que deba registrarse como pagado conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y

XXI.- Tribunal: Sala Especializada en materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas

ARTÍCULO 3.- Son sujetos de fiscalización aquellos entes públicos que reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de:

I.- El Poder Ejecutivo, las dependencias de la administración pública directa y las entidades paraestatales, las unidades de apoyo adscritas directamente al Ejecutivo del Estado y los organismos públicos constituidos por el propio Ejecutivo;

II.- El Poder Judicial y los órganos que lo conforman, cualquiera que fuere su organización;

III.- El Poder Legislativo, sus dependencias y cualquiera de sus órganos, cualquiera que fuere su organización;

IV.- Los órganos constitucional o legalmente autónomos;

V.- Las universidades e instituciones públicas de educación superior y organizaciones con registro oficial que reciban recursos públicos;

VI.- Los ayuntamientos y cualquier autoridad, dependencia o entidad de la administración pública municipal;

VII.- Cualquier persona física o moral que reciba, administre o ejerza total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos; y

VIII.- Los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, cuando hayan recibido y ejercido por cualesquier título recursos públicos, aun cuando pertenezcan a los sectores privado o social.

ARTÍCULO 4.- La función de fiscalización, así como la interpretación de esta Ley, se desarrollará conforme a los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad.

Los principios de transparencia y máxima publicidad prevalecerán en la gestión de información y documentación en posesión de la auditoría.

La interpretación de la presente Ley estará a cargo del Instituto, por conducto del Auditor Mayor, para efectos de la fiscalización superior debiendo fundar y motivar sus decisiones.

ARTÍCULO 5.- En todas las cuestiones relativas a procedimiento no previstas en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

Artículo 6.- El Instituto conservará en su poder las cuentas públicas de cada ejercicio fiscal y mantendrá en su página de internet los informes correspondientes a los que se refiere la presente Ley, de los últimos diez ejercicios fiscales o, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión.

También se conservarán las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.

CAPÍTULO II

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 7.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de revisar y fiscalizar los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, de fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, así como deuda pública contraída con los particulares de los poderes del Estado, de los organismos constitucional y legalmente autónomos, de los ayuntamientos de los municipios, incluidos todos los entes, organismos, entidades, dependencias, fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de cualquier naturaleza que de cualquier modo dependa o forme parte de las entidades estatal o municipales, así como participaciones federales, en los términos de la legislación aplicable e igualmente los recursos públicos ejercidos por particulares, incluyéndose para dicho efecto las atribuciones necesarias para verificar que los ejercicios correspondientes se encuentren ajustados a los criterios, los planes y los programas especificados en los presupuestos respectivos, con el objeto de que el Congreso del Estado ejerza las funciones de control que le resultan inherentes conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado, con base en el trabajo que realice el Instituto.

El Instituto tendrá su domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y podrá establecer oficinas regionales para el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando, esto no represente una ampliación al presupuesto asignado.

ARTÍCULO 8.- El Instituto revisará, anualmente, las cuentas públicas que deberán presentar los sujetos de fiscalización. Asimismo, se revisarán los estados financieros que el Estado y los ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del trimestre correspondiente.

La información financiera que generen los entes públicos deberá ser difundida por cada ente, de conformidad con los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, en el plazo establecido en el párrafo anterior.

La información financiera será fiscalizada por el Instituto dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su publicación en la página de internet por los entes públicos, para lo cual se elaborarán y publicarán informes especiales.

El Congreso del Estado deberá remitir al Instituto, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que se reciban, los documentos a que se refiere este artículo. Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto podrá ejercer sus facultades de fiscalización en cualquier momento, misma que se efectuará de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen la federación y los órganos internos de control.

En caso de que los sujetos de fiscalización no remitan al Congreso del Estado los estados financieros a la conclusión del trimestre que corresponda, y una vez vencido el plazo referido para tal efecto, el Instituto podrá requerirlos a fin de que cumplan con dicha obligación, estableciendo las sanciones previstas en la presente ley en caso de incumplimiento.

No será impedimento para que el Instituto realice su función de fiscalización, si las cuentas públicas y/o informes trimestrales no están integrados y disponibles en los plazos y requisitos señalados.

Artículo 9.- Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado. En el supuesto de adecuaciones o ajustes, éstos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

ARTÍCULO 10.- El Instituto estará dirigido por un Auditor Mayor, quien contará en auxilio de sus funciones para efectos de atender sus operaciones fiscalizadoras cotidianas con dos Auditores Adjuntos. El primero será designado por votación de dos terceras partes de los diputados del Congreso presentes en la sesión, y los Auditores Adjuntos a propuesta del Auditor Mayor, por mayoría simple del propio Congreso.

ARTÍCULO 11.- El Auditor Mayor y los Auditores Adjuntos durarán en su encargo un periodo de siete años y podrán ser nombrados nuevamente por una sola vez. Durante su encargo sólo podrán ser removidos por el Congreso antes de que se venza el período para el que fueron designados por las causas graves previstas en esta ley y por la misma votación requerida para su nombramiento.

ARTÍCULO 12.- Una vez designado el Auditor Mayor y protestado por éste el cargo, deberá presentarle al Congreso en un plazo no mayor a treinta días hábiles su propuesta de

candidatos para ocupar los cargos de Auditores Adjuntos, quien deberá realizar la designación correspondiente dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles.

ARTÍCULO 13.- Para ser Auditor Mayor o Auditor Adjunto, se requiere:

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, ser de reconocida honorabilidad en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de funciones públicas que le hayan sido encomendadas;

II.- Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos. Contar con título profesional con antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

III.- No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado o Procurador General de la República; Senador, Diputado Federal o Local; Gobernador del Estado; titular o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; integrante de un Ayuntamiento; Magistrado en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y de Transparencia Informativa o de los Contenciosos administrativo, dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, todo lo anterior durante los tres años previos al día de su nombramiento;

IV.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado;

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito;

VI.- Haber residido en el Estado durante dos años anteriores al día de su nombramiento; y

VII.- No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los titulares de los poderes del Estado o secretarios de despacho, o de cualquier ente fiscalizado.

ARTÍCULO 14.- Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor Mayor y los Auditores Adjuntos, tendrán prohibido:

I. Formar parte de partido o asociación política alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios de Profesionales en representación del Instituto, y

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia el Instituto para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta.

ARTÍCULO 15.- El Auditor Mayor no podrá desempeñar comisiones o empleos en el Gobierno del Estado durante los dos años siguiente a la terminación de su encargo.

ARTÍCULO 16.- Sin perjuicio de lo establecido en los ordenamientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos, el Auditor Mayor y los Auditores Adjuntos podrán ser removidos por las siguientes causas graves:

I.- Destinar el patrimonio del Instituto a fines distintos a los de su objeto;

II.- Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe de Resultados;

III.- Utilizar, sustraer, destruir u ocultar, en beneficio propio o de terceros, los documentos o información a la que tenga acceso o a su cargo, a su cuidado o custodia, así como divulgar la información a la que debe reserva;

IV.- Realizar los actos prohibidos por el artículo 14 de esta ley;

V.- Ausentarse de sus actividades por más de quince días naturales sin autorización previa correspondiente, de conformidad con lo que disponga el reglamento respectivo;

VI.- Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los términos de la ley de Responsabilidades Administrativas, así como la inobservancia de los principios que se establecen en la presente ley;

VII.- Omitir el fincamiento de indemnizaciones, aplicación de sanciones, denuncia de hechos presumiblemente constitutivos de delito, u omita la formulación de recomendaciones y observaciones en el ámbito de su competencia y en los casos previstos en la ley;

VIII.- Cuando en el desempeño de su cargo incurrieren en falta de probidad, honradez o notoria ineficiencia;

IX.- Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esa Ley; y

X.- Contratar a servidores públicos que no cubran los requisitos determinados en la presente Ley, para el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 17.- La remoción del Auditor Mayor o Auditores Adjuntos deberá ser propuesta al Pleno del Congreso por la Comisión de Fiscalización. El Pleno determinará sobre la existencia o no de los motivos de la remoción, la remoción requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

La Comisión deberá dar derecho de audiencia al afectado.

ARTÍCULO 18.- Las ausencias temporales del Auditor Mayor, serán suplidas por los Auditores Adjuntos en los casos y en el orden que señale el reglamento interior del Instituto.

La ausencia definitiva del Auditor Mayor, antes del plazo para el cual fue designado, será suplida en los términos del párrafo anterior, en tanto el Congreso del Estado designe el nuevo titular, en los términos de este ordenamiento.

ARTÍCULO 19.- Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con la estructura administrativa estrictamente necesaria, contando, al menos, con las siguientes unidades administrativas: Secretaría Técnica, Dirección General de Evaluación al Desempeño, Dirección General de Administración, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Fiscalización de Obras Públicas, Dirección de Innovación y Dirección de Tecnologías de Información, conforme a la organización establecida en el reglamento interior y manual de organización de conformidad con el presupuesto autorizado. Asimismo, contará con una Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones y otra para substanciar los procedimientos que interponga en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, sus titulares serán nombrados por el Auditor Mayor, por un periodo de cinco años.

El Director de Asuntos Jurídicos deberá contar con título y cédula profesional en Derecho expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, diez años en el ejercicio de su profesión y experiencia de al menos tres años en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

El Director de Asuntos de Administración y de Finanzas deberá contar con título y cédula profesional en Contaduría Pública, Economía, Administración u otra área afín a la gestión y control de recursos públicos, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y contar con experiencia de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Para el debido y eficaz cumplimiento de sus tareas de fiscalización superior en el Estado de Sonora, así como, lograr el ejercicio cabal de su autonomía presupuestaria requiere aplicarse el principio de irreductibilidad presupuestal, es decir, el Instituto contará con un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, equivalente al 3.0 al millar del Presupuesto aprobado para el Gasto Público Estatal en el ejercicio que corresponda y nunca será menor que el presupuesto autorizado en el ejercicio inmediato anterior.

Los recursos presupuestales asignados y ejercidos por el Instituto, serán auditados por contador público certificado externo designado por el Órgano de Control Interno del Instituto.

ARTÍCULO 20.- El Instituto, además de las atribuciones específicas establecidas por la Constitución Política del Estado de Sonora, tendrá las siguientes:

I.- Definir y establecer los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la realización de las funciones de auditoría y fiscalización de las cuentas

públicas y de los estados financieros y deuda pública, tomando en consideración las disposiciones legales aplicables;

II.- Elaborar el programa anual de auditorías y llevar a cabo la fiscalización superior conforme al mismo, así como realizar las auditorías en los demás casos que acuerde el Congreso para determinados sujetos de fiscalización;

La fiscalización de la Cuenta Pública e informes trimestrales será enunciativa, mas no limitativa respecto a los datos contenidos en dichos documentos, por lo que el Instituto podrá ampliar el alcance de la misma, cuando derivado del proceso de fiscalización surjan datos o se determinen nuevos hallazgos del ejercicio fiscal en curso y anteriores, que permitan dicha ampliación;

Asimismo el Instituto podrá llevar a cabo auditorías en tiempo real y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen en el que se contenga un informe individual derivado de dicha auditoría.

III.- Asesorar de manera permanente a los sujetos de fiscalización, así como promover y realizar cursos y seminarios de capacitación y actualización, con base en los lineamientos que para tales efectos establezca;

IV.- Practicar auditorías preferentemente en el domicilio del sujeto obligado sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, así como los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos;

V.- Verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización con cargo a las partidas presupuestales correspondientes, se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, así como que se hayan realizado para el debido cumplimiento de sus funciones, conforme a la información que se proporcione en las correspondientes cuentas públicas;

VI.- Contratar a prestadores de servicios profesionales externos cuando así se requiera, para el ejercicio de sus funciones, e informar el resultado de sus actuaciones;

VII.- Requerir que los estados financieros para revisión de la cuenta pública de los poderes del Estado y de los Organismos Autónomos se encuentren dictaminados por Contador Público Certificado con registro para emitir dictámenes. Igualmente, se promoverá esta práctica en los municipios, cuando el monto de los ingresos aprobados por el Congreso en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, asciendan a un monto igual o superior a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente en la capital del Estado, durante el ejercicio fiscal correspondiente;

VIII.- Solicitar los programas anuales de auditoría de los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización, para coordinarse en las visitas de auditoría sobre la cuenta pública;

IX.- Coordinarse con los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización, para el acceso a los informes o dictámenes de auditoría y revisiones por ellos practicadas, así como sus programas y papeles de trabajo, documentos y archivos temporales o permanentes, relacionados con las auditorías y revisiones que conozcan;

X.- Verificar que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios se hubieren celebrado con apego a la legalidad y evaluar los efectos y resultados de los mismos para verificar que se aplicaron de manera eficiente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;

XI.- Emitir los pliegos de observaciones así como pliegos de presuntas responsabilidades derivados de la Fiscalización practicada a los entes públicos así como el Informe de Resultados de la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales, y emitir las recomendaciones procedentes, así como, dar seguimiento al cumplimiento efectuado por los sujetos de fiscalización hasta su solventación a juicio del Instituto;

XII.- Acordar con los sujetos de fiscalización las medidas, acciones y calendarios para la atención de las recomendaciones correspondientes;

XIII.- Promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de responsabilidades por las irregularidades o presuntas conductas ilícitas que se detecten, presentando las denuncias y pruebas que fueren necesarias para acreditar la presunta responsabilidad de quien resulte y fungir como coadyuvantes en los procedimientos que se lleven a cabo, en los términos en esta ley, así como en la Ley Estatal de Responsabilidades;

XIV.- Promover las acciones que resulten conducentes para determinar el fincamiento de las indemnizaciones que correspondan así como la recuperación de Daños y Perjuicios causados a las haciendas públicas estatal y municipal por la acreditación de daño patrimonial, solicitando su reintegro y resarcimiento en los términos previstos en esta ley, así como en la Ley Estatal de Responsabilidades;

En relación a las faltas administrativas no graves, se dará vista a la autoridad competente a efecto de que realice las acciones correspondientes. En caso de las faltas administrativas no graves, pero que a causa de estas se provoquen daños y perjuicios al erario público, el resarcimiento de éstos será determinado por el Instituto;

XV.- Participar en los términos de ley, en el Sistema Nacional de Fiscalización, así como en el Sistema Estatal Anticorrupción;

XVI.- Concertar y celebrar convenios con la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de fiscalización homólogos de la Federación, las Entidades Federativas, y el Gobierno del Estado, así como con los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización a que se refiere esta ley así como con cualquier institución, asociaciones privadas o civiles, en materia

de cooperación técnica, institucional, administrativa y capacitación, para el debido cumplimiento de los fines de esta ley;

XVII.- Elaborar estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos;

XVIII.- Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto anual, para su incorporación, en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Sonora;

XIX.- Emitir y aprobar el reglamento interior del Instituto, manuales de organización y de procedimientos, así como, acuerdos, guías y lineamientos de normatividad interna. El Instituto publicará en el Boletín Oficial del Estado su normatividad interna conforme a las disposiciones legales aplicables;

XX.- Establecer y operar un Fondo de Fortalecimiento para la Auditoría y Fiscalización Superior del Estado de Sonora, cuyas Reglas de Operación, estarán delimitadas en los lineamientos respectivos que deberá aprobar el Auditor Mayor;

XXI.- Evaluar el desempeño de los gobiernos estatal y municipal mediante la aplicación de indicadores que determinen y verifiquen si los recursos públicos fueron usados de manera adecuada, óptima y racional, de conformidad con los indicadores incorporados en los presupuestos de egresos correspondientes;

XXII.- Elaborar el Código de Ética, Política de Integridad y Conducta Institucional, así como, un protocolo de seguridad que regule la actuación del personal adscrito al Instituto, establecer el Servicio Civil de Carrera del Instituto, así como, emitir y aprobar el Reglamento del mismo;

XXIII.- Promover una cultura de honestidad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, además desalentar en todos los niveles del servicio público las conductas de faltas de probidad;

XXIV.- Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XXV.- Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las leyes fiscales y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;

XXVI.- Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables;

XXVII.- Requerir, a los auditores externos, copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de ser requerido, el soporte documental;

XXVIII.- Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación respecto de sus facultades de fiscalización de los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado al Gobierno del Estado, gobiernos municipales, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XXIX.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley Estatal de Responsabilidades;

XXX.- Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones;

XXXI.- Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio político;

XXXII.- Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la autoridad substanciadora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que éste, de considerarlo procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno de control;

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos internos de control competentes, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan;

En atención a las faltas no graves detectadas por el Instituto, este podrá concertar y celebrar convenios con los órganos internos de control de los municipios que no cuenten con la capacidad para implementar la estructura necesaria a efecto de llevar a cabo la investigación y substanciación de las faltas administrativas calificadas como no graves, con la finalidad de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, realice estas hasta la etapa de culminación de la audiencia inicial y recepción de pruebas, debiendo los citados órganos de control, continuar con la admisión y valoración de las pruebas recibidas a efecto de que estos resuelvan lo conducente y determinen la sanción aplicable de acuerdo a la ley de la materia.

XXXIII.- Promover y dar seguimiento, ante las autoridades competentes, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores estatales, municipales y los particulares, por violaciones a la presente ley;

XXXIV.- Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción y en su Comité Coordinador, en los términos de lo dispuesto en la ley general en la materia;

XXXV.- Solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de las Cuentas Públicas. Lo anterior sin perjuicio de la revisión y fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización realice en forma posterior;

XXXVI.- Obtener, durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones, copia de los documentos originales que se tengan a la vista y certificarlas mediante cotejo con sus originales. Asimismo, podrá solicitar la documentación en copias certificadas;

XXXVII.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización;

XXXVIII.- Solicitar la comparecencia de las personas que se considere, en los casos concretos que así se determine en esta Ley, así como en la Ley Estatal de Responsabilidades;

XXXIX.- Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de las Cuentas Públicas, para tal efecto el Instituto deberá Emitir un dictamen técnico de opinión sobre la constitución y operación de los fondos y fideicomisos en los que intervengan las entidades fiscalizadas;

XL.- Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las demás disposiciones aplicables;

XLI.- Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información contenida en los mismos;

XLII.- Solicitar, obtener y tener acceso según corresponda a toda la información y documentación, que a juicio del Instituto sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que obren en poder de:

- a) Las entidades fiscalizadas;
- b) Los órganos internos de control;
- c) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;

d) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y

e) Autoridades hacendarias federales y locales.

El Instituto tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Titular del Instituto y los auditores adjuntos a que se refiere esta Ley.

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al Instituto información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el Instituto en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

XLIII.- Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del Instituto presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la autoridad substanciadora del mismo Instituto, para que éste, de considerarlo procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno de control.

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos internos de control competentes, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan;

Lo referente a los informes de presunta responsabilidad administrativa, que emita la autoridad investigadora, los escritos que emita la autoridad substanciadora ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como los escritos de vista ante los Órganos Internos de Control, Estatales o Municipales y los Escritos de Denuncia por presuntos hechos constitutivos de delito, todos estos invariablemente deberán ser autorizados por el Auditor Mayor del Instituto;

XLIV.- Emitir su opinión cuando le sea solicitado por el Congreso, sobre las asignaciones, ampliaciones o variaciones presupuestarias, la adquisición o variaciones de la deuda pública y todas aquellas decisiones del Congreso que tengan impacto sobre la gestión financiera de las entidades fiscalizadas.

XLV.- Establecer los criterios para la elaboración, integración, así como para la entrega y recepción de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables;

XLVI.- Emitir lineamientos para la estandarización de los formatos electrónicos e impresos a utilizar por las entidades fiscalizadas; y

XLVII.- Las demás que le sean conferidas por esta ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalización de las Cuentas Públicas.

ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del Auditor Mayor:

I.- Fungir como representante legal del Instituto, con amplias facultades para ejercer las atribuciones conferidas al Instituto por la Constitución y la presente Ley, igualmente, las conferidas en su carácter de Auditor Mayor, estando facultado para delegar en sus subordinados, las funciones o atribuciones que resulten necesarias para el eficaz desempeño de las labores de fiscalización, promoción de denuncias por responsabilidades administrativas o penales ante las autoridades competentes, así como, promover denuncias derivadas de responsabilidades resarcitorias, emitir resoluciones, la aplicación y ejecución de sanciones a los sujetos de fiscalización;

II.- Elaborar, aprobar y presentar su proyecto de presupuesto anual;

III.- Contratar con instituciones bancarias, la apertura de cuentas para el manejo de su disponibilidad presupuestal o tesorería líquida;

IV.- Administrar los bienes y recursos a cargo del Instituto y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes y la prestación de servicios, sujetándose a la normatividad aplicable;

V.- Aprobar el Programa Anual de Actividades del Instituto, así como el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; así como las modificaciones que fuesen necesarias en función de las circunstancias que se presenten durante la ejecución de dichos programas, modificaciones que deberán de informarse al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Fiscalización;

VI.- Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley, el Reglamento Interior del Instituto, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos éstos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento;

VII.- Ordenar la práctica de Auditorías y/o visitas de inspección preferentemente en el lugar de la obra pública o en el domicilio del sujeto fiscalizado, con base en el Programa Anual de Auditorías así como formular los pliegos de observaciones que procedan;

VIII.- Integrar las comisiones que sean necesarias y seleccionar al personal capacitado, a fin de practicar las visitas, inspecciones y auditorías requeridas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 de esta Ley;

IX.- Proponer al Congreso el nombramiento de los Auditores Adjuntos;

X.- Nombrar y remover al personal del Instituto, así como expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos de dicho personal;

XI.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, pudiendo delegar dicha atribución previo acuerdo correspondiente;

XII.- Ejercer las atribuciones que corresponden al Instituto, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la presente Ley y el Reglamento Interior;

XIII.- Transparentar y dar seguimiento a las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;

XIV.- Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;

XV.- Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;

XVI.- Rendir un informe anual, basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado podrá presentar, desde su competencia, proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan;

XVII.- Absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación del Instituto o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad;

XVIII.- Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento del Instituto; que deberán ser publicados en la página Web del Instituto; asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto, ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y de la Ley del Presupuesto de egresos;

XIX.- Ser el enlace entre el Instituto y la Comisión;

XXI.- Recibir del Congreso del Estado, la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización superior;

XXII.- Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe de Resultados así como los informes individuales, a más tardar el 30 de agosto del año de la presentación de la Cuenta Pública;

XXIII.- Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los entes fiscalizados del Estado y de los Municipios, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional o estatal, para la mejor realización de sus atribuciones;

XXIV.- Solicitar y en su caso convenir con la Secretaría de Hacienda del Estado, el cobro de las multas que se impongan en los términos de esta Ley;

XXV.- Promover el fincamiento de todo tipo de responsabilidades ante las autoridades competentes como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización;

XXVI.- Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos, y

XXVII.- Las demás previstas en la presente Ley y su reglamento.

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones de los Auditores Adjuntos las siguientes:

I.- Suplir ausencias del Auditor Mayor, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior;

II.- Dar cuenta al Auditor Mayor del despacho de los asuntos de su competencia, así como los programas cuya coordinación se les hubiere asignado;

III.- Coordinar la planeación y programación de actividades del personal a su cargo y someter a la consideración del Auditor Mayor, la metodología de planeación de las auditorías y programa anual de actividades;

IV.- Requerir la información y documentación a los sujetos de fiscalización para la planeación y práctica de auditorías, visitas e inspecciones; y

V.- Las demás previstas en la presente ley y su reglamento.

CAPÍTULO III DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 23.- El Congreso del Estado integrará la Comisión de Fiscalización con el objeto de que dicho órgano sea el conducto mediante el cual se lleven a cabo las tareas de comunicación entre el Instituto y el Poder Legislativo para que, éste último, pueda ejercer las funciones previstas en la Constitución Política del Estado de Sonora.

Son atribuciones de la Comisión de Fiscalización, las siguientes:

I.- Remitir al Instituto los Estados Financieros trimestrales y las cuentas públicas de los sujetos de fiscalización para su revisión y fiscalización;

II.- Presentar al Pleno del Congreso el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas que le presente el Auditor Mayor;

III.- Celebrar reuniones de trabajo con el Auditor Mayor o citarlo a comparecer **y/o a los titulares de las entidades fiscalizadas que considere**, para conocer, en lo específico, el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas o cualquier otro asunto relacionado con la función fiscalizadora. ;

Las justificaciones y aclaraciones que para tal efecto presenten los titulares de las entidades fiscalizadas deberán ser consideradas por la comisión para la elaboración de su dictamen, sin que puedan pronunciarse en ningún caso, sobre la solventación o fincamiento de responsabilidades;

Concluidas las comparencias de los titulares de las entidades fiscalizadas, la comisión elaborará el dictamen correspondiente, sin que ello signifique que se suspenda el trámite de las acciones promovidas por el Instituto, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley.

IV.- Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones elabore el Instituto, así como sus modificaciones;

V.- Presentar, al Pleno del Congreso, las propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Mayor y de Auditores Adjuntos, propuestos por el Auditor Mayor, así como las solicitudes de remoción;

VI.- Dar seguimiento a las opiniones que emitan las Comisiones de dictamen del Congreso del Estado, en relación con el desempeño en el cumplimiento de metas y aspectos presupuestales contenidos en los Estados Financieros trimestrales y las cuentas públicas de los entes públicos sujetos a la presente Ley;

VII. Conocer los criterios, bases, circulares y normas de evaluación que emita el Instituto para la fiscalización de las cuentas públicas anuales de los entes fiscalizados;

VIII.-Recibir el informe expedido por el Auditor Mayor del Estado, en el que se señalen las entidades fiscalizadas que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de su cuenta pública;

IX.- Citar al Auditor Mayor para conocer en lo específico el Informe Anual de Resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, a efecto de ampliar o aclarar el contenido de los informes; podrá también, requerirle aclaraciones por escrito; y

X.- Las demás que le asignen esta ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV

DE LA COORDINACIÓN

ARTÍCULO 24.- El Instituto podrá convenir con la Auditoría Superior de la Federación, los Órganos Superiores de Fiscalización de las Entidades Federativas, la Secretaría de la Contraloría General, los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental municipales y los órganos de control interno de los demás sujetos de fiscalización, con el objeto de:

I.- Estandarizar el ejercicio de la auditoría gubernamental que se practica en el Estado de Sonora, tanto por el Instituto, los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización y los auditores de los despachos externos que sean contratados;

II.-Garantizar la estricta observancia y aplicación de las normas, sistemas, métodos y procedimientos de contabilidad gubernamental y archivo integral, así como definir normas de control interno, como referente técnico para su implementación;

III.- Homogeneizar criterios para emitir observaciones, así como para la solventación y seguimiento de las mismas;

IV.- Intercambiar información en materia de fiscalización, control y auditoría gubernamental;

V.- Capacitar al personal que realiza funciones de auditoría y fiscalización;

VI.- Coordinar la práctica de visitas a los sujetos de fiscalización, a fin de evitar el ejercicio simultáneo de las funciones de auditoría, fiscalización o de control que correspondan realizarse a los mismos, en materia de la cuenta pública;

VII. Otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones; y

VIII. Facilitar la documentación que le sea solicitada sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera.

CAPÍTULO V

DE LA CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 25.- La Cuenta Pública es el informe que los poderes del Estado y los entes públicos estatales presentarán de manera individual para ser consolidada a través del Ejecutivo estatal; los municipios de la Entidad y los entes públicos municipales a través de los ayuntamientos, que rinden a la legislatura local, sobre su gestión financiera a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo y custodia, así como la aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los órganos constitucional o legalmente autónomos y cualquier otro sujeto de fiscalización que reciba, administre o ejerza por

cualquier motivo recursos públicos, se integrarán de manera individual, para ser presentada al Congreso del Estado de Sonora, quien lo remitirá al Instituto superior de Auditoria y Fiscalización dentro del plazo establecido en el artículo 8 de esta Ley y contendrán en la medida que corresponda, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo siguiente:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de variación en la hacienda pública;
- c) Estado de cambios en la situación financiera;
- d) Informes sobre pasivos contingentes;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo; y
- g) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Corto y largo plazo;
 - 2.- Fuentes de financiamiento;
 - 3.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización;
 - 4.- Intereses de la deuda; e
 - 5.- Informe que detalle las modificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores.

II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Administrativa;
 - 2.- Económica y por objeto del gasto; y
 - 3.- Funcional - programática;

- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo;
- d) Intereses de la deuda;
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; e
- f) Informe del Gasto devengado de Adeudos de Ejercicios Anteriores.

III.- Información programática, con la desagregación siguiente:

- a) Gasto por categoría programática;
- b) Programas y proyectos de inversión;
- c) Indicadores de resultados; y

IV.- La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

Las cuentas públicas de los municipios, deberán producir como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de variación en la hacienda pública;
- c) Estado de cambios en la situación financiera;
- d) Notas a los estados financieros,
- e) Estado analítico del activo;
- f) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Corto y largo plazo;
 - 2.- Fuentes de financiamiento;
 - 3.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; y

- 4.- Intereses de la deuda; e
- 5.- Informe que detalle las modificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores.

II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Administrativa;
 - 2.- Económica y por objeto del gasto; y
 - 3.- Funcional- programática;
- c) Informe del Gasto devengado de Adeudos de Ejercicios Anteriores.

La integración de la información antes señalada deberá entregarse en forma escrita, complementada con todos sus anexos y acompañados a la misma un archivo electrónico manipulable que contenga dicha información, atendiendo lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como, el Acuerdo para armonizar la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2013 y la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora.

El hecho de presentar o no las cuentas públicas o los estados financieros trimestrales por parte de los sujetos de fiscalización, no impide el ejercicio de las atribuciones del Instituto.

ARTÍCULO 26.- En el ejercicio de la función de auditoría, revisión y fiscalización de las cuentas públicas por parte del Instituto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- I.- La función de fiscalización tiene el carácter técnico, autónomo, externo y permanente;
- II.- En los procedimientos de fiscalización se utilizarán las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas de Información Financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, las mejores prácticas y toda aquella disposición normativa aplicable en la materia;
- III.- El proceso de fiscalización deberá documentarse en su totalidad;
- IV.- Las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización, se darán a conocer al sujeto de fiscalización, para que sean atendidas durante el mismo proceso y hasta antes de

concluir el informe de resultados; en cualquier caso se procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se atiendan o corrijan las irregularidades detectadas o defectos de la información sobre el uso de los recursos públicos;

V.- El personal del Instituto o de los despachos externos que participen en los procesos de fiscalización, deberá ser especializado, actuar con el debido apego al Código de ética y conducta institucional, mantener la confidencialidad que exigen dichas funciones, ser profesionista debidamente titulado y con cédula profesional expedida por las autoridades en la materia; y

VI.- El personal del Instituto, tendrá la obligación de excusarse de conocer asuntos referidos a los sujetos de fiscalización cuando exista relación de parentesco sin limitación de grado en línea recta o hasta el cuarto grado en línea colateral, con los sujetos de fiscalización o sus titulares.

ARTÍCULO 27.- Los prestadores de servicios profesionales o despachos externos que participen en los procesos de fiscalización del Instituto, tendrán la obligación de excusarse de conocer asuntos referidos a los sujetos de fiscalización, en los que se encuentren prestando sus servicios de cualquier índole o naturaleza, o con los que mantenga cualquier clase de relación contractual, exista relación de parentesco en línea recta o hasta el cuarto grado en línea colateral con los sujetos de fiscalización o sus titulares.

Las auditorías en las que se maneje información relacionada con seguridad pública del Estado o municipios, serán realizadas exclusivamente por el Instituto.

El Instituto y los sujetos de fiscalización podrán llevar a cabo contrataciones de servicios profesionales o despachos externos para el cumplimiento de sus atribuciones, siendo exigible únicamente el contrato y que los reportes o informes denominados entregables, sean acordes al objeto y periodo previsto de entrega en el mismo, debiéndose regular dichas contrataciones por el Código Civil.

ARTÍCULO 28.- La revisión, auditoría y fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto:

I.- Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;

Para el caso de los empréstitos, que estos se ejerzan de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;

c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público estatal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos de los sujetos fiscalizados;

d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:

1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos; y

3. Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

II.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas:

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal o municipales de Desarrollo, según corresponda y los programas respectivos; y

c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

III.- Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión

de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan; y

IV.- Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas.

ARTÍCULO 29.- Serán parte del programa anual de auditorías del Instituto los siguientes objetivos:

- a) Auditar al menos el 50% de las obras públicas realizadas por el Estado, los Municipios y los entes públicos, dando prioridad a los de mayor monto comprometido. Las obras a revisar serán aquellas ejercidas con recursos de los capítulos de inversión pública, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y participaciones y aportaciones. La revisión incluirá desde el otorgamiento del oficio de autorización, los procesos de adjudicación/licitación de cada una de las obras, así como su comprobación documental y verificación física.

Las inversiones públicas son todas las asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento, incluyendo los gastos de pre-inversión y preparación del proyecto.

- b) Auditar cada uno de los procesos de adquisiciones y licitaciones de bienes y servicios correspondientes a los capítulos materiales y suministros, servicios generales, y bienes muebles, inmuebles e intangibles, realizados cuyo monto sea igual o mayor a un millón de pesos, realizados por los entes públicos, dando prioridad a la fiscalización de las de mayor monto comprometido. La revisión comprenderá desde el inicio del proceso de adjudicación y/o licitación hasta la comprobación documental y verificación física de los bienes adquiridos y/o servicios contratados.

- c) Auditar los financiamientos de corto y largo plazos contratados por los entes públicos. La revisión incluirá los procesos de adjudicación y/o licitación de los financiamientos, así como el cumplimiento de los términos del contrato y/o convenio entre las partes. Asimismo, se revisarán todas las inversiones públicas realizadas con los financiamientos a largo plazo. La revisión de las inversiones públicas productivas incluirá los procesos de adjudicación/licitación de cada una de las inversiones, además de su comprobación documental y verificación física.

- d) Auditar los refinanciamientos y reestructuraciones de financiamientos contratados por los entes públicos. La revisión incluirá los procesos de adjudicación y/o licitación de los financiamientos, así como el cumplimiento de los términos del contrato y/o convenio entre las partes.

- e) Auditar las Alianzas Público Privadas celebradas por los entes públicos. La revisión incluirá los procesos de adjudicación y/o licitación de los servicios, así como el cumplimiento de los términos del contrato y/o convenio entre las partes.

f) Auditar los recursos asignados para el pago de servicios personales. La revisión incluirá que los pagos, incluyendo compensaciones y cualquier concepto, se ajusten a los tabuladores y plazas autorizadas; cálculo, retención y pago correspondiente por concepto de impuestos y prestaciones de seguridad social, y

g) Auditar las modificaciones a resultados de Ejercicios anteriores y el gasto devengado en adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Las auditorías que se realicen deberán verificar igualmente el cumplimiento de la normatividad aplicable en cada caso.

Previo acuerdo de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, al aprobarse el paquete presupuestal del ejercicio fiscal siguiente, el Instituto contemplará los límites y alcances de cobertura del Programa Anual de Auditorías.

ARTÍCULO 30.- La omisión de presentar las cuentas públicas en los plazos y términos que señala la Constitución Política del Estado de Sonora y esta Ley, constituye una violación grave que redundará en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Por lo que el servidor público del sujeto fiscalizado, responsable de presentarla, causará baja temporal de tres meses en la primera ocasión, garantizando al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, y se aumentará la sanción a inhabilitación en casos de reincidencia, una vez que sea notificado por el Instituto al superior jerárquico.

CAPÍTULO VI

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ARTÍCULO 31.- El Instituto establecerá un programa anual de auditorías, a más tardar en el mes de septiembre, señalando la totalidad de los sujetos de fiscalización que serán objeto de la misma, conforme a los criterios, normas y prioridades que determine, mismo que deberá de ser autorizado por el Auditor Mayor del Instituto y publicado en la página Web del mismo.

Dicho programa anual podrá modificarse cuando el Instituto lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiéndose publicar dichas modificaciones en su página Web. Asimismo, al avance del Programa General de Fiscalización deberá darse la misma difusión.

ARTÍCULO 32.- El Instituto, para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Sonora y esta ley, goza de facultades para practicar visitas, inspecciones y auditorías a los sujetos de fiscalización, así como para requerirles todos los elementos de información y documentación necesarios para cumplir con sus funciones; preferentemente las auditorías se efectuarán en el lugar de la obra pública o en el domicilio del sujeto fiscalizado, y en su caso podrá invocarse las configuraciones positivas

previstas en el artículo 75 fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 33.- El Instituto podrá solicitar de manera casuística y concreta, información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa, subprograma o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. Así como cualquier información específica que sea requerida dentro de la fiscalización en curso, sin que ello, implique considerar abierta la auditoría del ejercicio anterior que corresponda.

ARTÍCULO 34.- Los sujetos de fiscalización están obligados a garantizar la conservación óptima de toda la documentación y archivos que contengan la información financiera y contable correspondiente, así como los documentos comprobatorios de los ingresos y egresos y toda aquella información relacionada o que forme parte de la cuenta pública y serán responsables por su custodia y administración de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 35.- El Instituto para el desarrollo de sus actividades fiscalizadoras, en materia de acceso a la información, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Tener acceso a los datos, libros, archivos, expedientes y demás documentación comprobatoria relativa al ingreso y gasto público estatal, municipales y de cualquier sujeto de fiscalización, así como a toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones, para lo cual, deberá solicitarla expresando los fines a los que se destinará la información;

II.- Requerir a terceros que hubieran contratado con los sujetos de fiscalización obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto en la cuenta pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes. El plazo para la entrega de documentación e información requerida por el Instituto será de un máximo de 15 días hábiles, de haber incumplimiento se aplicarán las sanciones contempladas en la presente ley al servidor público del sujeto fiscalizado responsable de atender el requerimiento del Instituto;

III.- Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la información proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos del Instituto, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva que alude el artículo 23 fracción V de esta Ley de Fiscalización Superior;

IV.- Podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o

la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño. Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que el Instituto emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, correspondientes a otros ejercicios fiscales, proceda a formular las promociones de responsabilidades administrativas o las denuncias correspondientes en términos de lo dispuesto en la presente Ley.

También podrá solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública;

V.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales así como también poder solicitar la documentación en copias certificadas;

VI.- Solicitar, por conducto del Auditor Mayor, la comparecencia de las personas que se considere, en los casos concretos que así se determine en esta Ley;

VII.- El Instituto tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos públicos y de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades; y

VIII.- Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al Instituto información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, éste deberá garantizar que no se incorpore en los informes de resultados, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica. Dicha información será conservada por el Instituto en sus documentos de trabajo y solo podrá ser revelada a la autoridad competente, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o la instauración de un procedimiento resarcitorio.

Los expedientes que contengan datos personales de niñas, niños y adolescentes, así como los relativos a créditos personales, créditos educativos, becas, para vivienda, clínicos y de apoyo económico deberán ser verificados y auditados en las instalaciones de los sujetos fiscalizados procurando que bajo ninguna circunstancia se extraigan los expedientes del lugar de resguardo, ni se deberán copiar en papel o mediante dispositivos electrónicos, en base a lo anterior, el Instituto sólo podrá tomar datos para el cumplimiento del ejercicio de sus funciones de verificación y, en su caso, obtener copias certificadas o copias para ser cotejadas con sus originales, de los documentos a que se hace referencia en el presente párrafo, cuando sea detectada alguna irregularidad en el ejercicio de recursos públicos, para los efectos de promoción de faltas administrativas graves o no graves, siempre y cuando los documentos estén testados de acuerdo a lo que dispone la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

ARTÍCULO 36.- Cuando al Instituto no se le proporcione en tiempo y forma la información que solicite o no se le permita la revisión de los libros, instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso o del gasto público; así como la práctica de visitas, inspecciones o auditorías; o en caso de que el sujeto de fiscalización no dé cumplimiento a la solventación del pliego de observaciones o no promueva el fincamiento de responsabilidades, el servidor público que resulte responsable quedará suspendido temporalmente por 30 días hábiles, garantizando al presunto responsable lo necesario para mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, a partir de que el Instituto le notifique al superior, con independencia de la promoción de responsabilidades que resulten aplicables ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 37.- Las observaciones que, en su caso, emita el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en:

I.- Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político; y

II.- Recomendaciones.

Artículo 38.- El Instituto, con base en el dictamen final que emita el área responsable de la llevar a cabo la auditoría, formulará a los presuntos responsables los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de las cuentas públicas, en donde se especificará:

I.- La determinación en cantidad líquida de los presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública estatal, municipal o, en su caso, federal, debidamente fundada y motivada;

II.- El incumplimiento a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia u honradez en la administración de los recursos públicos; y

III.- La presunta responsabilidad de los infractores.

El pliego de observaciones será formulado por el Auditor Mayor, quien podrá delegarlo al Auditor Especial correspondiente. En los casos en que la irregularidad no exceda de cien veces la Unidad de Medida y Actualización en la fecha en que se cometa la infracción, no se formulará el pliego de observaciones respectivo, sin perjuicio de las acciones que se promuevan ante las instancias de control competentes para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias o denuncias de carácter penal.

El pliego de observaciones se dirigirá a los presuntos responsables, sean estos servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, para que dentro de un plazo improrrogable de 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surte efectos la notificación correspondiente, se presenten ante el Instituto a solventarlo, para lo cual se deberá acompañar

la información y documentación justificativa y aclaratoria correspondiente, y en su caso, el deslinde de responsabilidades.

El Instituto informará al titular de la entidad fiscalizada sobre la notificación del pliego de observaciones.

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio del Instituto, se iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias correspondiente.

El Instituto solicitará la intervención de las instancias de control para que, en el ámbito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, con excepción de las responsabilidades resarcitorias.

De igual forma, el Instituto integrará la información y documentación necesaria para la presentación de las denuncias penales correspondientes, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la fiscalización de las cuentas públicas.

El pliego de observaciones y demás documentación necesaria serán turnados a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, para el inicio del procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, así como para la promoción de otras responsabilidades y denuncias penales.

ARTÍCULO 39.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto podrá realizar, mediante visita domiciliaria, cualquiera de los siguientes tipos de auditoría:

- I.- Legal;
- II.- Financiera;
- III.- Presupuestal;
- IV.- De Desempeño;
- V.- Técnica a la Obra Pública;
- VI.- Forense; e
- VII.- Integral.

Las auditorías se realizarán con apego a la Normas de Auditoría Gubernamental y en su caso, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en todo caso, podrán realizarse con base en pruebas selectivas. En los criterios que sobre normas o principios pudiesen estar sujetos a interpretación, prevalecerán las disposiciones legales que se les relacionen, así como las disposiciones en materia de auditoría que resulten del Sistema Nacional de Fiscalización.

Para llevar a cabo una auditoría forense, el Instituto deberá contar con personal acreditado para realizarla; para tal efecto, creará un grupo interdisciplinario que pueda llevar a cabo la auditoría.

ARTÍCULO 40.- Durante la práctica de auditorías, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrá convocar, a las entidades fiscalizadas, a reuniones de trabajo para la revisión de los resultados preliminares.

ARTÍCULO 41.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrá grabar, en audio o video, cualquiera de las reuniones de trabajo y audiencias previstas en esta Ley, previo consentimiento por escrito de la o las personas que participen o a solicitud de la entidad fiscalizada, para integrar el archivo electrónico correspondiente.

ARTÍCULO 42.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas, la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías.

Las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de las Cuentas Públicas se sujetaran al procedimiento previsto en el artículo 44 de esta Ley a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan. Sin perjuicio de lo anterior el Instituto podrá citar a las entidades fiscalizadas por lo menos 10 días hábiles de anticipación para una última aclaración de sus resultados y observaciones de las auditorías practicadas conforme al procedimiento regulado en el artículo 44 de esta Ley.

Las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes en el día y hora que sean citadas en las que podrán presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte, las cuales deberán ser confrontadas por el Instituto para la elaboración de los informes finales.

Una vez que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización valore las justificaciones, aclaraciones y demás información contemplada en el procedimiento previsto en el artículo 44 de esta Ley y párrafos segundo y tercero del presente artículo, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales.

En caso de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares

correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

ARTÍCULO 43.- Lo previsto en los artículos 40, 41 y 42, de esta ley, se realizará sin perjuicio de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización convoque a las reuniones de trabajo que estime necesarias durante las auditorías correspondientes para la revisión de los resultados preliminares.

CAPÍTULO VII

DERECHOS DE LOS SUJETOS FISCALIZADOS

ARTÍCULO 44.- El Instituto deberá notificar a la entidad fiscalizada al menos con quince días hábiles de anticipación al inicio de la auditoría sea de gabinete o en el domicilio del sujeto fiscalizado, debiendo incluirse en esta notificación el año del ejercicio fiscal a auditar, así como la descripción y documentación que habrá de exhibirse ante el personal del Instituto, especificando si la auditoría será de visita domiciliaria o en sus propias instalaciones.

Apartado A: De las auditorías de gabinete:

En la notificación se deberán señalar los plazos de inicio y conclusión en los que se desarrollará la auditoría sin que ésta exceda los 90 días hábiles; para el desarrollo de la auditoría se observará lo siguiente:

I.- En las fechas que señale el Instituto se deberá entregar en medio electrónico o impreso la información al Instituto por parte del sujeto fiscalizado con el objeto de elaborar el acta de inicio de auditoría;

II.- La entidad fiscalizada deberá en el acto de inicio de auditoría, o previamente si así lo determina el Instituto, señalar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de presentar la documentación que sea requerida por los auditores. El plazo de revisión por parte de los auditores inicia a partir de que el sujeto de fiscalización entrega formalmente la información para la revisión de gabinete y dicho plazo no excederá de 40 días hábiles;

III.- Los representantes del Instituto deberán levantar acta circunstanciada de sus actuaciones, de conformidad con los formatos que para tal efecto elabore el Instituto, en presencia de dos testigos propuestos por el representante del sujeto de fiscalización o, en su ausencia o negativa, por quien practique la diligencia; haciendo constar los hechos u omisiones que hubieren detectado, dejando copia de la misma al sujeto de fiscalización. Las actas, declaraciones, o manifestaciones en ellas contenidos harán prueba en términos de ley;

IV.- Al concluir el plazo a que se refiere la fracción II de este apartado, dentro de los 15 días hábiles siguientes deberá hacer del conocimiento del sujeto de fiscalización las observaciones y recomendaciones de pre-cierre. El sujeto de fiscalización contará con 15 días hábiles para atender o subsanar en la etapa de pre-cierre las observaciones y recomendaciones detectadas en esta fase por el Instituto. Dentro de este mismo plazo, a petición del sujeto de fiscalización,

se podrá hacer una confronta con el Instituto para atender las recomendaciones u observaciones que en su caso se hubieren detectado.

V.- Concluido el plazo referido en la fracción anterior, el Instituto contará con un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia o no de las atenciones o solventaciones presentadas por el sujeto de fiscalización en la etapa de pre-cierre, debiendo señalar si las mismas están cumplidas total o parcialmente; en el último supuesto deberá señalar con precisión qué aspectos del cumplimiento parcial se encuentran pendientes de solventar motivando o señalando por qué no cumple o cumple parcialmente; y

VI.- Notificado el sujeto de fiscalización sobre si las observaciones o recomendaciones no cumplen o cumplen parcialmente, la auditoría entrara en etapa de cierre. Dentro del plazo señalado para el desarrollo de la auditoría al finalizar ésta se deberá elaborar un acta de cierre, para proceder a elaborar el informe individual de auditoría en un plazo no mayor a 20 días hábiles y continuar con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 55 de esta Ley.

El Instituto podrá ampliar el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente Apartado hasta por 60 días hábiles adicionales tanto para la administración pública estatal como para la administración pública municipal, para tal efecto el Instituto emitirá un acuerdo que funde y señale las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se tengan en consideración para acordar la necesidad de ampliar el plazo de la auditoría, el cual debe ser notificado al ente fiscalizado con al menos 10 días previos al vencimiento del plazo original.

Apartado B: De las auditorías en el lugar de la obra pública o en el domicilio del sujeto fiscalizado:

En la notificación se deberán señalar los plazos de inicio y conclusión en los que se desarrollará la auditoría sin que ésta exceda los 100 días hábiles para la administración pública estatal y para la administración pública municipal; para el desarrollo de la auditoría se observará lo siguiente:

I.- En las fechas que señale el Instituto se deberán de constituir los auditores en el domicilio de la entidad fiscalizada con el objeto de elaborar el acta de inicio de auditoría, debiendo acreditar el carácter de representantes del Instituto, para lo cual deberán presentar el oficio de comisión;

II.- La entidad fiscalizada deberá en el acto de inicio de auditoría, o previamente si así lo determina el Instituto, señalar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de presentar la documentación que sea requerida por los auditores. El plazo de revisión por parte de los auditores inicia a partir de que se constituyan los auditores en el domicilio del sujeto de fiscalización y dicho plazo no excederá de 60 días hábiles;

III.- Los representantes del Instituto deberán levantar acta circunstanciada de sus actuaciones, de conformidad con los formatos que para tal efecto elabore el Instituto, en presencia de dos testigos propuestos por el representante del sujeto de fiscalización o, en su ausencia o negativa, por quien practique la diligencia; haciendo constar los hechos u omisiones que

hubieren detectado, dejando copia de la misma al sujeto de fiscalización. Las actas, declaraciones, o manifestaciones en ellas contenidos harán prueba en términos de ley;

IV.- Al concluir el plazo a que se refiere la fracción II de este Apartado, dentro de los 15 días hábiles siguientes deberá hacer del conocimiento del sujeto de fiscalización las observaciones y recomendaciones de pre-cierre. El sujeto de fiscalización contará con 20 días hábiles para atender o subsanar en la etapa de pre-cierre las observaciones y recomendaciones detectadas en esta fase por el Instituto. Dentro de este mismo plazo, a petición del sujeto de fiscalización, se podrá hacer una confronta con el Instituto para atender las recomendaciones u observaciones que en su caso se hubieren detectado.

V.- Concluido el plazo referido en la fracción anterior, el Instituto contará con un plazo de 20 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia o no de las atenciones o solventaciones presentadas por el sujeto de fiscalización en la etapa de pre-cierre, debiendo señalar si las mismas están cumplidas total o parcialmente; en el último supuesto deberá señalar con precisión qué aspectos del cumplimiento parcial se encuentran pendientes de solventar motivando o señalando por qué no cumple o cumple parcialmente;

VI.- Dentro del plazo señalado para el desarrollo de la auditoría al finalizar ésta se deberá elaborar un acta de cierre, para proceder a elaborar el informe individual de auditoría en un plazo no mayor a 20 días hábiles y continuar con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 55 de esta Ley.

El Instituto podrá ampliar el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente Apartado por 60 días hábiles adicionales tanto para la administración pública estatal y como para la administración pública municipal, para tal efecto el Instituto emitirá un acuerdo que funde y señale las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se tengan en consideración para acordar la necesidad de ampliar el plazo de la auditoría, el cual deberá ser notificado al ente fiscalizado con al menos 10 días previos al vencimiento del plazo original.

APARTADO C: De las Auditorías a la Información Financiera Trimestral:

El Instituto analizará el contenido de la información financiera trimestral, de la cual emitirá un Informe Individual con una cédula de resultados, sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que correspondan.

El análisis a la información financiera trimestral a que se refiere este capítulo constará de las siguientes fases:

I. Una vez presentada la información financiera trimestral por parte del sujeto de fiscalización, el Instituto iniciará con la notificación del análisis conforme a lo previsto en esta ley;

II. El Instituto podrá acumular dos trimestres. Asimismo, solicitará la información y realizará las acciones que considere pertinentes para concluir el análisis en términos de lo dispuesto en esta ley;

III. No será impedimento para realizar el análisis de la información financiera trimestral, si la misma no fue presentada en los plazos y requisitos señalados en esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de la promoción de las responsabilidades a que haya lugar por la omisión en su presentación; y

IV. Concluido el análisis, el Instituto entregará al sujeto fiscalizado una cédula de resultados.

ARTÍCULO 45.- Los representantes del Instituto deberán levantar acta circunstanciada de sus actuaciones, de conformidad con los formatos que para tal efecto elabore el Instituto, en presencia de dos testigos propuestos por el representante del sujeto de fiscalización o, en su ausencia o negativa, por quien practique la diligencia; haciendo constar los hechos u omisiones que hubieren detectado, dejando copia de la misma al sujeto de fiscalización. Las actas, declaraciones, o manifestaciones en ellas contenidas harán prueba en términos de ley.

En las actas referidas en el párrafo anterior se plasmarán las observaciones de auditoría en su conjunto, sin perjuicio de que ante hallazgos evidentes, se proceda de inmediato a levantar la correspondiente acta de uno o más hechos en particular, a efecto de proceder con los procedimientos de investigación y substanciación de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y la Ley Estatal de Responsabilidades.

ARTÍCULO 46.- Los servidores públicos del Instituto y las personas que éste contrate como externos, serán responsables de guardar estricta reserva, confidencialidad y secrecía de la información o de los documentos, actuaciones, informes y observaciones a que tengan acceso en sus funciones y que con motivo del objeto de esta ley conozcan.

ARTÍCULO 47.- Para la fiscalización de los recursos públicos que sean otorgados a particulares, de cualquier índole, partida o programa, se practicarán las auditorías que estarán destinadas exclusivamente a la revisión del origen, aplicación, administración o destino de dichos recursos públicos, así como los fines para los que fueron otorgados. A menos que no se tenga aperturada una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos públicos, se fiscalizarán las disponibilidades de recursos en su conjunto.

ARTÍCULO 48.- En el Informe de Resultados sobre la revisión de las cuentas públicas que emita el Instituto, los sujetos fiscalizados podrán solicitar, de manera oportuna, que se incorporen al citado informe los comentarios y observaciones que consideren pertinentes.

Una vez concluidos los procedimientos de auditoría y solventación correspondiente, el Instituto entregará a los sujetos de fiscalización que corresponda, la notificación de los

resultados obtenidos. En su caso, a petición de parte, el Instituto podrá entregar avances sobre la situación en que se encuentra la solventación de las observaciones determinadas.

CAPÍTULO VIII

DEL INFORME DE RESULTADOS

ARTÍCULO 49.- El Informe de resultados que el Instituto entregará al Congreso, por conducto de la Comisión de Fiscalización, en relación con las cuentas públicas correspondientes, deberá contener, por lo menos y según sea el caso:

- I.- Las conclusiones y comentarios del Auditor Mayor del proceso de fiscalización;
- II.- La manifestación de que la información fue preparada y presentada por el sujeto fiscalizado de acuerdo a la normatividad establecida, de la revisión y propuesta de calificación de las cuentas públicas en su caso;
- III.- Para los efectos de este artículo, el Instituto deberá presentar al Congreso su propuesta de sistema de calificación a más tardar en marzo de cada año. La Comisión entregará sus observaciones a la propuesta a más tardar en mayo de cada año, para lo cual realizará consultas con las distintas Comisiones del Congreso;
- IV.- La evaluación y resultados de la gestión financiera;
- V.- La evaluación del cumplimiento y grado de avance que se haya dado al Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo respectivamente, así como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos y metas, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con los presupuestos que fueron aprobados;
- VI.- El cumplimiento que se haya dado a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado y a las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos Municipales, al Presupuesto de Egresos del Estado y a los Presupuestos de Egresos Municipales y demás normas aplicables, en la recaudación y aplicación de los recursos públicos;
- VII.- Un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable;
- VIII.- El cumplimiento que los sujetos de fiscalización hubieren dado a las normas y principios básicos de contabilidad gubernamental y las normas de información financiera, así como su apego a las disposiciones legales;
- IX.- El análisis de las variaciones presupuestales con respecto a lo autorizado en el presupuesto correspondiente;

X.- La determinación que establezca el monto, en cantidad líquida, de los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipales o al patrimonio de los sujetos de fiscalización, que se hubieran detectado durante el proceso de fiscalización, sin perjuicio de los que se pudieran detectar de manera adicional en los términos de la presente Ley;

XI.- El Pliego de Observaciones y medidas de solventación que hubiere emitido;

XII.- La relación de las solicitudes de información que los sujetos de fiscalización se hubieran negado a cumplir, en tiempo y forma, ante el Instituto para el desarrollo de sus funciones;

XIII.- En su caso, los comentarios y observaciones de los sujetos de fiscalización;

XIV.- Un resumen de las auditorías realizadas;

XV.- Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;

XVI.- La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de los poderes del Estado, la Administración Pública Estatal y el gasto ejercido por órganos constitucionales autónomos. En el caso de los ayuntamientos, la proporción será señalada en función de la administración pública directa y paramunicipal; y

XVII.- Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

El Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública emitido por el Instituto, deberá ser entregado a más tardar el día 30 de agosto y hará prueba plena en todos los procedimientos de responsabilidades que se deriven de las observaciones detectadas en los procesos de auditoría y fiscalización.

El Informe de Resultados tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de internet del Instituto en la misma fecha en que sea presentado al Congreso; mientras ello no suceda, el Instituto deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán carácter público, y se mantendrán en la página de Internet del Instituto en formatos abiertos, conforme se vayan concluyendo.

El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, podrá requerir al Instituto para que, por conducto de los servidores públicos correspondientes, acudan a ampliar o aclarar el contenido del Informe de Resultados, sin que, para todos los efectos legales, se entienda modificado el referido informe.

ARTÍCULO 50.- El Instituto informará al Congreso de los procedimientos iniciados para el establecimiento de la indemnización establecida en el artículo 67 de la Constitución Política

del Estado de Sonora, así como de la promoción de cualquier tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Dicha información será pública, sujeta a lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días quince de los meses de mayo y noviembre de cada año.

El Instituto deberá incluir en el informe la falta de colaboración de las entidades fiscalizadas.

CAPÍTULO IX

DE LOS INFORMES INDIVIDUALES

ARTÍCULO 51.- El Instituto elaborará informes individuales de las auditorías que se concluyan, los cuales deberán ser publicados en la página de internet del Instituto, debiendo informar de ello al Congreso del Estado, a través de la Comisión

ARTÍCULO 52.- Los Informes Individuales de auditoría contendrán como mínimo lo siguiente:

I.- Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

II.- Los nombres de los servidores públicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

III.- El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

IV.- Los resultados de la fiscalización efectuada;

V.- Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, denuncias de hechos; y

VI.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

El Informe de resultados de la Revisión de la Cuenta Pública emitido por el Instituto, deberá ser entregado a más tardar el día 30 de agosto y hará prueba plena en todos los procedimientos de responsabilidades que se deriven de las observaciones detectadas en los procesos de auditoría y fiscalización.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrá el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en formatos abiertos, conforme se vayan concluyendo.

ARTÍCULO 53.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización dará cuenta al Congreso del Estado, en los informes individuales, de las observaciones, recomendaciones y acciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.

ARTÍCULO 54.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización informará al Congreso del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días quince de los meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del año, respectivamente.

El informe semestral se elaborará con base en los formatos que al efecto establezca la Comisión e incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y esta Ley. Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos y se mantendrá de manera permanente en la página en Internet.

En dicho informe, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido.

Lo relacionado a los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a conocer el número de pliegos emitidos y su estatus procesal respecto de los tres ejercicios fiscales anteriores.

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades competentes, en dicho informe se dará a conocer la información actualizada sobre la situación que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas, las causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia así como, en su caso, la pena impuesta.

CAPÍTULO X

DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 55.- El Titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización enviará a las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido emitido, el informe individual, a efecto de ser notificado al ente que corresponda, el cual contendrá las acciones y las recomendaciones que les correspondan y en forma separada el pliego de observaciones pendientes de solventación, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes, si vencido el plazo antes mencionado el servidor público, el responsable de enviar respuesta al Instituto para la solventación de observaciones no lo hiciera, procederá una amonestación en su contra y se le concederán 3 días hábiles para remitir la información de referencia y si al término del plazo antes mencionado no remite respuesta alguna, procederá multa económica, que prevé el artículo 77 fracción II de esta ley, concediéndole un último plazo de 3 días hábiles más para tal efecto y de no atender la solventación de observaciones procederá en su contra la suspensión o separación temporal del cargo por el plazo de 30 días en los términos del artículo 36 de esta ley.

Una vez recibido el informe individual y pliego de observaciones pendientes de solventar, por parte de los entes fiscalizables y transcurrido el término de 30 días hábiles otorgado para la solventación de las observaciones contenidas en dicho pliego, el Instituto emitirá un Informe de Solventación respecto de aquellas observaciones que hayan sido solventadas; en tanto, por lo que respecta a las observaciones que no fueron solventadas y de las cuales no se recibió información aclaratoria y no se acordó con el instituto a petición expresa del ente respecto del calendario para solventación de las mismas, se emitirá después de ello un pliego de presuntas responsabilidades, en el que constaran todas las observaciones pendientes de solventar, con el cual se procederá de inmediato con el proceso de investigación en el área del Instituto competente para ello, a efecto de calificar las faltas, para posteriormente emitir el informe de presunta responsabilidad, y en caso de resultar faltas no graves, se procederá dando vista al Órgano de Control Interno del Estado o en su caso los municipios, y de resultar faltas graves se procederá a remitir el citado informe de presunta responsabilidad a la autoridad substanciadora o en su caso remitir las denuncias penales que resulten ante la autoridad competente.

Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se notificarán a los servidores públicos involucrados en la presunta responsabilidad; en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación correspondiente, deberán precisar ante el Instituto las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

En cualquier caso, el Instituto deberá dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas hasta su total satisfacción.

ARTÍCULO 56.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, al promover o emitir las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente:

I.- A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional para atender las observaciones que se hayan realizado;

II.- Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida los posibles daños o perjuicios, o ambos a las haciendas Estatal o municipales o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos;

III.- Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización;

IV.- A través del informe de presunta responsabilidad administrativa, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización promoverá ante el Tribunal, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorías, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.

En caso de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a las Haciendas Estatal o municipales, o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades;

V.- Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas;

En relación a la promoción de responsabilidades a que alude el párrafo anterior y tratándose de órganos internos de control de los municipios del Estado, que no cuenten con la estructura necesaria a efecto de llevar a cabo la investigación y substanciación de las faltas administrativas, estos podrán acceder a lo previsto en el tercer párrafo de la fracción XXXII del artículo 20 de esta ley.

VI.- Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, la posible comisión de hechos delictivos; y

VII.- En su caso, por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, que redunden

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente.

ARTÍCULO 57.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización deberá pronunciarse, en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones.

En dicho plazo, el ente fiscalizado podrá mantener comunicación constante con el ISAF para el efecto de llevar a cabo la solventación correspondiente.

Con independencia de lo anterior, en cualquier momento, los servidores y ex servidores públicos podrán aportar al Instituto información relacionada con la solventación de observaciones.

ARTÍCULO 58.- Antes de emitir sus recomendaciones, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización analizará con las entidades fiscalizadas, las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales, las entidades fiscalizadas, a través de sus representantes o enlaces, suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, las actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrá emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas.

La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación.

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo que antecede, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización enviará al Congreso del Estado, un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere el párrafo anterior.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización deberá informar a los entes fiscalizados a través de su portal Web, el estado que guarda cada una de las observaciones, haciéndoles de su conocimiento aquellas que se hayan solventado parcialmente y las que no fueron solventadas.

ARTÍCULO 59.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrá promover, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal, así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente.

CAPÍTULO XI

DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES

ARTÍCULO 60.- Cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, el Instituto, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

Las denuncias podrán presentarse en el Congreso del Estado, la Comisión o directamente en el Instituto y los informes individuales contendrán un apartado respecto de las denuncias en trámite derivado de lo que dispone este Capítulo.

Las denuncias que sean recibidas por la Comisión y el Congreso del Estado, deberán ser remitidas al Instituto dentro de dos días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 61.- Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con documentos y evidencias suficientes mediante los cuales se presuma fehacientemente el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley.

El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

- I.- El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares; y
- II.- Descripción de los presuntos hechos irregulares.

Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba que se relacionen directamente con los hechos denunciados. El Instituto deberá proteger en todo momento la identidad del denunciante.

ARTÍCULO 62.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia:

- I.- Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;
- II.- Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos;
- III.- Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;
- IV.- La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos; y

V.- Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.

El Instituto informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.

ARTÍCULO 63.- El Auditor Mayor, en atención a lo previsto en el artículo 61 de esta ley y con base en el análisis técnico jurídico de procedencia de denuncia que al efecto emita el área competente del Instituto, autorizará, en su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión.

Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la información que les solicite el Instituto.

El Instituto tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías a que se refiere este Capítulo.

Una vez realizadas las auditorías derivadas de denuncias ante el Instituto, y para los efectos de investigación y substanciación se procederá conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 55 de esta Ley, la calificación de las faltas que realice el instituto deberá ser notificada al denunciante y podrá ser impugnada por este en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades

El Instituto deberá reportar en los informes correspondientes, el estado que guarden las observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorías, así como la relación que contenga la totalidad de denuncias recibidas.

ARTÍCULO 64.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, el Instituto rendirá un informe al Congreso del Estado, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás legislación aplicable.

Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades procedan ni de otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública.

CAPÍTULO XII

DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 65.- Si de la fiscalización que realice el Instituto se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, el Instituto procederá a:

I.- Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

II.- Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior.

En caso de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y a lo dispuesto en este capítulo;

III.- Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV.- Coadyuvar con la Fiscalía Especializada, en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. La Fiscalía Especializada podrá recabar, previamente, la opinión del Instituto, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, podrá hacerlo del conocimiento del Instituto para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

El Instituto podrá impugnar, ante la autoridad competente, las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento; y

V.- Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte del Instituto cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias.

Las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa podrán ser recurridas por el Instituto, cuando lo considere pertinente, en términos de la legislación aplicable.

Conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la determinación de responsabilidades deberá observarse el principio de presunción de inocencia.

ARTÍCULO 66.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo anterior, tiene por objeto resarcir, únicamente con bienes de los infractores, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga a los responsables.

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de otras sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes.

ARTÍCULO 67.- La unidad administrativa del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a cargo de las investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, penales a los servidores públicos del Instituto, cuando derivado de las auditorías a cargo de ésta, no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley.

El Instituto será responsable solidario de los daños y perjuicios que en términos de este capítulo, causen los servidores públicos de la misma y los auditores externos, contratados para la práctica de auditorías, sin perjuicio de que el Instituto promueva las acciones legales que correspondan en contra de los responsables.

ARTÍCULO 68.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes públicos y del Instituto, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.

ARTÍCULO 69.- La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del Instituto promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad del propio Instituto encargado de fungir como autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas.

Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios.

Dicha unidad administrativa contará con las más amplias facultades para realizar las diligencias que resulten necesarias a efecto de allegarse de todos los elementos de prueba a fin de conocer la verdad sobre las investigaciones a su cargo y así estar en posibilidades de determinar las responsabilidades que correspondan.

El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, se regirá por lo dispuesto en las leyes estatales en materia de responsabilidades.

El escrito que la autoridad investigadora elabore a efecto de dar vista de las faltas no graves a los Órganos Internos de Control, Estatales o Municipales o los de Denuncia por la posible comisión de delitos, ante la autoridad que resulte competente, todos deberán ser autorizados por el Auditor Mayor del Instituto.

ARTÍCULO 70.- La unidad administrativa del Instituto a la que se le encomiende la substanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del Instituto, deberá contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las facultades que la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras.

Los titulares de las unidades referidas deberán cumplir, al momento de su designación, con los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, ser de reconocida honorabilidad en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de funciones públicas que le hayan sido encomendadas;

II.- Contar al momento de su designación, con título profesional con antigüedad mínima cinco años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

III.- No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado o Procurador General de la República; Senador, Diputado Federal o Local; Gobernador del Estado; titular o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; integrante de un Ayuntamiento; Magistrado en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral o de Justicia Administrativa, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, todo lo anterior durante el año previo al día de su nombramiento; y

IV.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado.

ARTÍCULO 71.- Los órganos internos de control deberán informar al Instituto, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.

Asimismo, los órganos internos de control deberán informar al Instituto, de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución.

ARTÍCULO 72.- El Instituto, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, incluirá en la plataforma nacional digital establecida en dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos vinculados a éstas.

ARTÍCULO 73.- La facultad del Instituto para promover las responsabilidades ante las autoridades competentes, respecto de la comisión de faltas graves y no graves derivadas de observaciones detectadas por el instituto, así como la facultad de aplicar sanciones a los sujetos de fiscalización por infracciones a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, prescribe en los términos y plazos indicados en la Ley Estatal de Responsabilidades.

ARTÍCULO 74.- Para efecto de atender las observaciones que les formule el Instituto, las personas que hubieren ocupado el cargo de servidor público de los sujetos de fiscalización, con motivo de los procesos de fiscalización que correspondan al periodo de su gestión, podrán solicitar por escrito la información que consideren pertinente a los titulares de los sujetos de fiscalización, mismos que deberán entregar al Instituto, dentro de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la solicitud correspondiente.

El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad para el servidor público que injustificadamente niegue la entrega de información solicitada.

CAPÍTULO XIII

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 75.- Los sujetos de fiscalización, tendrán las siguientes obligaciones:

I.- Corresponderá al poder Ejecutivo por conducto de su Secretario de Hacienda o equivalente, a los Ayuntamientos por conducto de sus Tesoreros Municipales o equivalente y a los Directores de Administración o su equivalente para el caso de los demás entes públicos estatales o municipales respectivamente, entregar en los plazos establecidos y de manera completa, en formato impreso y archivo digital, la información correspondiente a los estados financieros trimestrales;

II.- Permitir las visitas de auditoría, inspección y fiscalización;

III.- Proporcionar la documentación que solicite el Instituto para llevar a cabo la fiscalización que realice o cualquier otra información que se les requiera. Igual obligación tienen los servidores públicos, funcionarios y empleados de las administraciones públicas estatal y municipal, así como las instituciones privadas, particulares o cualquier sujeto de fiscalización que haya ejercido recursos públicos;

IV.- Corresponderá al Poder Ejecutivo por conducto de su Secretario de Hacienda o su equivalente, a los Ayuntamientos por conducto de sus Tesoreros Municipales o su equivalente y a los Directores de Administración o su equivalente para el caso de los demás entes públicos estatales o municipales respectivamente, entregar las cuentas públicas a más tardar el último día de febrero del año posterior al ejercicio que corresponda, debiendo entregarse en formato impreso y archivo electrónico, complementada con todos sus anexos.

Sin perjuicio a lo señalado en el párrafo anterior, las cuentas públicas deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de sus páginas de internet para su fiscalización por parte del Instituto, en la misma fecha a la de su presentación y de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

V.- Corresponderá a los Titulares de los Órganos de Control Interno Estatal, de los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental Municipales o sus equivalentes y de los demás entes públicos estatales y municipales respectivamente, rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones;

VI.- Corresponderá a los Titulares de los Órganos de Control Interno Estatal y de los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental Municipales o su equivalente y de los demás entes públicos estatales y municipales respectivamente, realizar las gestiones necesarias y presentar la comprobación documental y las justificaciones necesarios para la solventación de las observaciones en los plazos indicados; y

VII.- La información financiera que generen los entes públicos deberá ser difundida por cada uno de ellos, de conformidad con los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Ley, por parte de los servidores públicos de los sujetos de fiscalización dará lugar a las sanciones que se señalan en este ordenamiento.

CAPÍTULO XIV

SANCIONES

ARTÍCULO 76.- El Instituto podrá imponer sanciones por infracciones a esta Ley a los servidores públicos de los sujetos de fiscalización, del propio Instituto y a las personas físicas o morales a quienes les resulte aplicable la presente Ley.

El fincamiento de responsabilidades que les resulten, su aplicación y el cumplimiento de las sanciones, no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones y medidas de solventación de las observaciones detectadas por su acción u omisión.

En caso de que los servidores públicos, a que se hace referencia en este artículo, incurran en reincidencia respecto de las observaciones detectadas, con respecto del ejercicio anterior, les serán aplicadas las sanciones previstas en el artículo 77 fracción II, de esta ley, con independencia de las responsabilidades que pudiesen resultar en razón de la observación detectada, la cual podrá derivar en falta no grave y falta grave, ya que la sanción a que se refiere este párrafo será solo por el hecho de que el servidor público responsable, sea recurrente en su actuación, independientemente de la obligación de solventar las mismas, sanción que será aumentada al doble por cada vez que se presente tal situación en forma consecutiva, hasta llegar a las 1000 unidades de medida y actualización, de acuerdo al capítulo XVIII de esta ley.

Para efectos de este artículo, no se considerará reincidencia la observación, aunque sea concurrente, si para su debida solventación se requiera la acción directa de un ente distinto al fiscalizado.

ARTÍCULO 77.- Las infracciones a las disposiciones previstas en la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con:

I.- Amonestación;

II.- Multa de 10 hasta 1000 unidades de medida y actualización; o

III.- Suspensión del empleo, cargo o comisión, solo en los supuestos previstos en los artículos 30 y 36 de esta ley.

Las multas que imponga el Instituto deberán ser notificadas al infractor, quien contará con un plazo de quince días hábiles siguientes a partir de la fecha de notificación para su cumplimiento. En caso contrario, las multas se constituirán en créditos fiscales y se deberán hacer efectivas por la Secretaría de Hacienda o las Tesorerías municipales, según corresponda, conforme al procedimiento administrativo de ejecución.

La Secretaría de Hacienda o las Tesorerías municipales, según corresponda, deberán informar mensualmente al Instituto de los trámites que se hayan realizado para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.

El importe recuperado en los términos de esta Ley deberá ser entregado a las respectivas áreas administrativas de las entidades fiscalizadas que sufrieron el daño o perjuicio respectivo.

Dicho importe sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el Presupuesto.

ARTÍCULO 78.- El Instituto, en la imposición de sanciones deberá tomar en cuenta lo siguiente:

I.- La gravedad de la falta;

II.- Las condiciones económicas y grado de escolaridad del infractor.

Para determinar las condiciones económicas del infractor, en el supuesto de servidores públicos o funcionarios o empleados del sector privado se atenderá a las percepciones que por cualquier concepto hayan recibido por la prestación de sus servicios a las dependencias o instituciones públicas o empresas o instituciones privadas en el año anterior al momento de cometerse la infracción. Para tal efecto, dichas dependencias, o instituciones públicas o privadas estarán obligadas a dar esa información a el Instituto, cuando ésta así se los requiera;

III.- El nivel jerárquico, tratándose de servidores públicos; y

IV.- La reincidencia de la conducta, en cuyo caso el monto de la multa se podrá duplicar.

Se considerará reincidente, al que habiendo incurrido en una infracción y haya sido sancionado, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

ARTÍCULO 79.- El importe de las multas que se recuperen por las sanciones impuestas derivado del incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se depositarán en el Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización Superior del Estado de Sonora.

CAPÍTULO XV

DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 80.- Las sanciones y demás resoluciones que emita el Instituto, podrán ser impugnadas por el servidor público, por los particulares o por los sujetos fiscalizados, ante el Tribunal, mediante el recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la sanción o resolución recurrida.

ARTÍCULO 81.- La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio del servidor público, del particular o del sujeto fiscalizado, le cause la sanción o resolución impugnada, acompañando copia de la constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento de pruebas que considere necesario rendir, señalando en su escrito domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Hermosillo, Sonora;

Tratándose de una omisión respecto del señalamiento del domicilio para oír o recibir notificaciones, el Tribunal esperará un término de 5 días hábiles para que el interesado realice la designación correspondiente, y en caso de no hacerlo, las notificaciones se harán por lista o estrados.

II.- El Tribunal, acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas documentales y supervenientes ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen ofrecidas conforme a derecho; y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Tribunal emitirá la resolución dentro de los sesenta días hábiles siguientes, notificándola al interesado. El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita la resolución respectiva, en este caso, el Tribunal lo sobreseerá sin mayor trámite.

Para el trámite y resolución del presente recurso, deberán aplicarse las disposiciones conducentes en la Ley Estatal de Responsabilidades, aplicando supletoriamente la legislación que esta ley establece.

ARTÍCULO 82.- La interposición del recurso podrá suspender la ejecución de la sanción o resolución recurrida, la suspensión se podrá conceder por el Magistrado del Tribunal que conozca del asunto a petición de parte desde el mismo acuerdo que admita la demanda y hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. Tendrá por efecto mantener las cosas en el estado que se encuentre, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoriada.

No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público, o se deja sin materia el juicio.

ARTÍCULO 83.- Los servidores públicos, para la interposición del recurso de revisión respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas a su costa de los documentos correspondientes.

ARTÍCULO 84.- El Tribunal, en las resoluciones que emita sobre el recurso de revisión, podrá:

I.- Declararlo improcedente o sobreseerlo;

II.- Confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnadas; o revocar el acuerdo de ampliación de auditoría; y

III.- Reponer en su caso, el acto o procedimiento que originó la resolución impugnada.

CAPÍTULO XVI

DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 85.- El Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior del Estado de Sonora, se formará con:

I.- Las multas que imponga el Instituto;

II.- Los intereses que generen los depósitos que como garantía reciba, así como los rendimientos sobre depósitos bancarios; y

III.- Los ingresos por la fiscalización de obras públicas, por el cobro por expedición de copias simples, certificadas o digitalizadas y cualquier otro ingreso estipulado en ésta u otras leyes.

ARTÍCULO 86.- Los recursos financieros del Fondo se utilizarán preferentemente para los siguientes fines, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

I.- Contratar personal por honorarios y programas de capacitación al personal del Instituto;

II.- Modernización del Instituto;

III.- Adquisición de bienes muebles e inmuebles necesarios para su objeto; y

IV.- Las prioridades que señale el Auditor Mayor.

El auditor Mayor deberá presentar al órgano de control interno, informes trimestrales del destino de los recursos financieros del Fondo.

CAPÍTULO XVII

DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

ARTÍCULO 87.- El Instituto recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por el Auditor Mayor en el programa anual de auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe de Resultados. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, debiendo el Auditor Mayor informar a la Comisión, así como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías.

El Instituto contestará las solicitudes dentro de un plazo de 30 días hábiles, explicando las razones de su determinación.

Los resultados de las auditorías practicadas deberán ser incluidos en el Informe de Resultados.

ARTÍCULO 88.- Las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias que presente la sociedad civil ante el Instituto, la Comisión, o el Congreso, adquirirán carácter vinculante para el Instituto, y se deberán incluir en el programa anual, siempre que sean presentadas por el equivalente de, al menos, el 0.05% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Estatal Electoral, tratándose de los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Dependencias Estatales, Fideicomisos u Órganos descentralizados, o bien, presentadas por, al menos, el 0.05% del total inscrito en el Padrón Municipal Electoral del Municipio respectivo, tratándose de Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales.

ARTÍCULO 89.- La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios electrónicos o por escrito libre dirigido ante la Comisión quien pondrá a disposición de los particulares los formatos correspondientes.

CAPÍTULO XVIII

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE NO REINCIDENCIA

ARTÍCULO 90.- El Instituto a efecto de establecer medidas disciplinarias para los sujetos fiscalizados deberá promover la creación de un programa estatal de no reincidencia, en el cual, se buscará disminuir las faltas a las normas del ejercicio del gasto público y demás requerimientos administrativos hacia los sujetos fiscalizados.

ARTÍCULO 91.- El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con los órganos de control interno de los sujetos fiscalizados a efecto de iniciar programas o acciones correctivas para evitar reincidencias en faltas y requerimientos a que se hace referencia en el artículo anterior, esto al margen de la solventación (sic) de observaciones que en cada caso deban realizar los sujetos fiscalizados, el objetivo de dichos convenios será evitar que los sujetos fiscalizados sean recurrentes en las observaciones en relación al ejercicio anterior, independientemente del fincamiento de responsabilidades inherentes a cada caso.

ARTÍCULO 92.- Los sujetos fiscalizados que firmen el convenio para la operación del programa estatal de no reincidencia, deberán recibir toda la información necesaria por parte del Instituto para el establecimiento de las acciones correctivas.

ARTÍCULO 93.- El Instituto deberá generar un informe interno por medio de su área de Auditoría al Desempeño, en el cual se contenga una matriz de indicadores que permita realizar un diagnóstico sobre sujetos fiscalizados que sean recurrentes en las observaciones detectadas por el Instituto, dicho informe deberá ser un instrumento que permita brindar información adicional a los documentos que el Instituto ya desarrolla, dicho informe será la base para determinar el funcionamiento del programa estatal de no reincidencia al que se hace alusión.

El Instituto deberá generar un informe público, que deberá ser publicado en su página web sobre las acciones realizadas en la materia debiendo acreditar el mismo con la documentación necesaria para ello.

ARTÍCULO 94.- Los sujetos fiscalizados tienen la responsabilidad de no reincidir en las observaciones que el Instituto detecte en los procesos de auditoría, el incumplimiento por parte de los sujetos en cuestión a las medidas correctivas determinadas por el Instituto en los términos del presente capítulo, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 77, fracción II de la presente ley.

CAPÍTULO XIX

DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 95.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:

I.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

II.- Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos,

III.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.

ARTÍCULO 96.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

ARTÍCULO 97.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen del acto a notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Boletín Oficial del Estado y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación local.

ARTÍCULO 98.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación realizada en términos del artículo anterior.

ARTÍCULO 99.- Son supletorias a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, las establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

CAPÍTULO XX

DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ARTÍCULO 100.- La Contraloría interna es responsable del control y evaluación del desarrollo administrativo y financiero del Instituto, así como del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Instituto, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.

ARTÍCULO 101.- La Contraloría Interna es un órgano técnico y presupuestalmente autónomo, teniendo las siguientes atribuciones:

I.- Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación que deben observar las dependencias del Instituto;

II.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con las funciones del Instituto, y darles el seguimiento oportuno;

III.- Instaurar procedimientos administrativos a los servidores públicos del Instituto que infrinjan la ley, dictando las sanciones administrativas que correspondan en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades por faltas no graves;

IV.- Promover ante la Sala Especializada en materia de Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa las sanciones que corresponden por faltas graves cometidas por los servidores públicos del Instituto;

V.- Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y cumplimiento de metas e indicadores del Instituto, así como la debida aplicación de los recursos a su cargo; así como requerir a los servidores públicos del Instituto por la documentación e información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. La omisión de dichos servidores públicos en entregar la información o documentación que les sean requeridas, o entregarla de manera extemporánea, será causal de responsabilidad en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades;

VI.- Presentar denuncias y querellas ante la autoridad competente, en contra de quien resulte responsable por la probable comisión de delitos, imputables a los servidores públicos del Instituto;

VII.- Llevar el registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales y, en su caso, fiscales y de intereses, de los servidores públicos del Instituto;

VIII.- Administrar su presupuesto de manera autónoma, de acuerdo con el calendario de ministraciones que para tal efecto le notifique al Instituto;

IX.- Presentar ante el Congreso del Estado, solicitud para remover al Auditor Mayor del Instituto, en caso de incurrir en las causas graves que se establecen las leyes correspondientes;

X.- Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos del Instituto;

XI.- Implementar las políticas eficaces de ética pública, política de integridad y conducta institucional para los servidores públicos del Instituto;

XII.- Establecer las bases y lineamientos para la implementación del Servicio Profesional de Carrera, para aquellos servidores públicos vinculados a la investigación y sustanciación de las faltas administrativas, en los términos que esta ley dispone; y

XIII.- Las demás que establezca la ley.

ARTÍCULO 102.- Para desempeñar el cargo de Contralor Interno se requiere:

I.- Ser ciudadano sonorenses en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, ser de reconocida honorabilidad en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de funciones públicas que le hayan sido encomendadas.

II.- Contar con título profesional y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

III.- No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado o Procurador General de la República; Senador, Diputado Federal o Local; Gobernador del Estado; Presidente o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; integrante de un Ayuntamiento; Magistrado en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y de Transparencia Informativa o de Justicia Administrativa, dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, consejero estatal electoral, todo lo anterior durante el año previo al día de su nombramiento.

IV.- No contar con antecedentes penales;

V.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado; y

VI.- Tener, previo a su designación, residencia en el Estado de Sonora con una antigüedad de 3 años si es nacido en el Estado, y de 5 años si es nacido fuera del Estado.

ARTÍCULO 103.- La Contraloría Interna contará con las áreas, unidades y personal necesario para su funcionamiento, cuyo personal será nombrado y removido por el Contralor Interno, conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos, entre las que se incluyen las autoridades investigadoras y substanciadoras, así como las de auditoría.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Fiscalización Superior, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 14 de julio del 2008, así como los decretos por los que se expidieron sus reformas.

ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto las disposiciones legales que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- La revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2021 se efectuará conforme a las disposiciones vigentes en dicho ejercicio. La revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2022 y posteriores se realizará bajo las disposiciones de la presente ley. Las acciones de fiscalización emprendidas por el ISAF realizadas del ejercicio 2021 previas a la entrada en vigor de la presente ley se realizarán conforme a las disposiciones vigentes en las que se realizaron dichas acciones.

ARTÍCULO QUINTO.- El Auditor Mayor emitirá el reglamento interior del Instituto dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Los procedimientos y actuaciones que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán por el Instituto, hasta su total resolución, conforme a la Ley de Fiscalización Superior.

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los procedimientos administrativos y actuaciones iniciados de conformidad a la Ley 168 de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la normatividad que se encontraba vigente, así como los hechos que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta el mes de diciembre del 2021.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización deberá actualizar y, en su caso, publicar los manuales y normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO NOVENO.- Los recursos de revisión en trámite ante el Instituto, con anterioridad de la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos por el Instituto.

ATENTAMENTE

**DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL**

DIP. ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA

DIP. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES

DIP. JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

DIP. ERNESTO ROGER MUNRO JR.

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.